

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

36ª REUNION — CONTINUACION DE LA
11ª SESION ORDINARIA — NOVIEMBRE 19 DE 1977

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Marcelo Eduardo López Arias, Rafael Manuel Pascual
y José Gabriel Dumón.

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALOVICH, Eduardo Antonio
ABAN, Gloria del Socorro
ABASTO, Ángel Leónidas
ACEVEDO, Sergio Edgardo
ADAIME, Felipe Teófilo
ALARCIA, Martha Carmen
ALESSANDRO, Darío Pedro
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALTERACH, Miguel Ángel
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGUE, Raúl Ángel
ALVAREZ GARCIA, Normando Miguel
ALLENDE, Alfredo Estantislao
ARAGONÉS de JUÁREZ, Mercedes M.
ARIAS, César
ATANASOF, Alfredo Néstor
AVILA, Eduardo Carlos
AYETZ, Lilliana
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BANZAS de MOREAU, María del C.
BARBERIS, Edgardo Ángel
BARRIONUEVO, Eduardo Ernesto
BARRIOS, Luis Américo
BECERRA, Carlos Armando
BENZI, María Cristina de los Angeles
BIANCULLI, Leticia
BIZZOTTO, Ileana
BONINO, Miguel Ángel
BONOMI, Silvia Mónica
BORDÍN, Hugo Antonio
BORTOLOZZI de BOGADO, A. R.
BRAVO, Alfredo Pedro
BRAVO, Leopoldo Alfredo
BRESER, Adalberto Edgardo
BRITOS, Oraldo Norvel
BULACIO, Rafael Alberto
BULLRICH, Patricia
CAFIERO, Juan Pablo
CAILLET, Carmen del Rosario
CALLABA, Aníbal
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Miguel
CAMBARERI, Fortunato Rafael

CAMPERO, Rodolfo Martín
CARBAJAL, Anroldo Dante
CARCA, Elisa Beatriz
CARDOSO, Marta Elena
CARRARA, Emilio Eduardo
CARRIÓ, Elisa María Avelina
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS de MARÍN, Fani A.
CLOSS, Ramón Alberto
CORCHUELO BLASCO, José Manuel
CRUCHAGA, Melchor René
CHICA, Juan José
DAS NEVES, Mario
D'ELIA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Lillan del Carmen
DÍAZ LOZANO, Julio César
DÍAZ MARTINEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DÓMINA, Esteban Alberto
DOMÍNGUEZ, Dolores Carmen
DOMÍNGUEZ, Lorenzo Sebastián
DOMSIC, Lidia C.
DRAGICEVIC, Carmen Nilda
DRISALDI, María Rita
DUFOU, Pedro Alfredo
DUMÓN, José Gabriel
ESCALANTE ORTIZ, Herminia Elsa
FADEL, Mario Nalib
FABRASSIN, Carlos Alberto
FAYAD, Víctor Manuel Federico
FERNÁNDEZ, Alberto Manuel
FERNÁNDEZ de COMBES, Elsa A.
FIGUEROA, Pedro Octavio
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge Roque
GALMARINI, Fernando Nicolás
GARAY, Nicolás Alfredo
GARRE, Nilda Celia
GATTI, Héctor Ángel
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIANNI, Gloria María Cristina
GIMÉNEZ, Ramón Francisco

GOLPE, Carlos Horacio
GOLLY, Eduardo Ceferino
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GONZÁLEZ, María Luisa
GOÑI, María Virginia
GORINI, Floreal Edmundo
GRANADOS, Dulce
GUDINO, Ermelinda Amalia
GUEVARA, Cristina Rosalía
GUTIÉRREZ, Diana Bárbara
GUTIÉRREZ, Gustavo Eduardo
GUZMAN, María Cristina
HERRERA, Alberto.
ILLIA, Martín Arturo
IRRAZABAL, Lilliana María del Carmen
ISEQUILLA, Amalia
JAUNARENA, José Horacio
JOGA, Vicente Bienvenido
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAEHLER, Enrique Rolando
LAFFERRIÈRE, Ricardo Emilio
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LENCE, Héctor
LIPONEZKY de AMAVET, Sara G.
LÓPEZ, Elsa Isabel
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LIOPIS, Enrique Raúl
MACEDO, Horacio Antonio
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ, Manuel Luis
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ CARBINO, Emilio Raúl
MARTÍNEZ ZUCCARDI, Manuel A.
MATHOV, Enrique José
MAURETTE, Fernando Wenceslao
MELOGNO, Elsa
MERCADER, Martha Evelyn
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MONDELO, Lidia Elizabeth
MONDINO, Eduardo René
MONTIEL, Sergio Alberto
MOSSELLO de BENZO, María del C.
MOTHE, Félix Arturo
MÜLLER, Mabel Hilda

MUSA, Laura Cristina
 NEDER, Jorge Humberto
 NEGRI, Mario Raúl
 NIEVA, Alejandro Mario
 OHARRIO, Luis Manuel
 OCAMPOS, Jorge Armando
 OLIMA, Juan Carlos
 PANDO, Ana María
 PARAJÓN, José María
 PARENTELLA, Irma Fidela
 PARRA, Nélida del Carmen
 PASCUAL, Rafael Manuel
 PASQUALINI de ACOSTA, Elida E.
 PASSO, Juan Carlos
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 PELÁEZ, Víctor
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PEREYRA de MONTENEGRO, María G.
 PÉREZ, Jorge Telmo
 PERNASETTI, Horacio Francisco
 PERRINI, Gioconda Eulalia
 PEZOA, Juan Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PINÓN ÁVILA, Celia Isabel
 PIJIZ, Juan Carlos
 POLINO, Héctor Teodoro
 POLO, Luis Nicolás
 PRUYAS, Tomás Rubén
 RAIMUNDI, Carlos Alberto
 RAMPI, Pascual Ángel
 REMEDI, Luz E.
 ROBERTI, Raquel Griselda
 ROBLES, Miguel Ángel
 RODIL, Rodolfo
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, Mabel E.
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROJO, Rubén Darío
 ROLLANO, Eduardo Daniel
 ROY, Irma
 RUBEO, Luis
 RUBINI, Mirta Elsa
 RUIZ PALACIOS, José David A.

SAGGESE, Néstor Mario
 SALIM, Fernando Omar
 SALINO, María Antonia
 SALTO, Julio Francisco José
 SÁNCHEZ, Mary
 SANTA MARÍA, José F.
 SANTANDER, Mario Armando
 SARQUIZ, José Alberto
 SAT, Oscar
 SCRIMIZZI, Gloria Elida
 SCHIARETTI, Juan
 SEBASTIANI, Claudio Augusto
 SOBRINO, Margarita María
 SOLANAS, Fernando Exequiel
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA, Edmundo del Valle
 SPERATTI, Alfredo Ramiro
 STORANI, Federico Teobaldo Manuel
 STUBBIN, Marcelo Juan Alberto
 SUÁREZ, Juan Carlos
 TAGLIARICO, José A.
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TOMA, Miguel Ángel
 TRETTEL MEYER, Raúl
 TULLIO, Rosa Ester
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENSENTINI, Marcelo Eduardo
 VERAMENDI, Juan Carlos
 VIANA, Mariano Roberto
 VIGLIONE, Atilio Oscar
 VILCHE, Carlos Alberto
 VIQUEIRA, Horacio Gustavo
 VITAR, José Alberto
 ZAVALÍA, José Luis
 ZUCCARDI, Cristina

AUSENTE, EN MISION OFICIAL:

AYALA, Juan Carlos
 CABALLERO MARTÍN, Carlos Aurelio
 GODOY, Norma
 MAQUEDA, Juan Carlos
 MENEM, Carlos Omar

MIRALLES de ROMERO, Norma A.
 NATALE, Alberto Adolfo
 RIVADERA, Marta Lilliana
 SAMPIETRO, Darci
 TOGNI de VELY, Adriana Leonor
 TOLOMEO, Leonor Ester
 VILLALBA, Alfredo Horacio

AUSENTE, CON LICENCIA:

KESSLER, Ana Raquel
 LEGUIZAMÓN, María Laura

AUSENTE, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

ARAMBURU, Guillermo Raúl
 BORDA, Osvaldo
 BORDENAVE, Marcela Antonia
 BRUNELLI, Naldo Raúl A.
 CAFFERATA NORES, José Ignacio
 ESTÉVEZ BOERO, Guillermo Emilio
 GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio
 HERRERA ARIAS, Manuel Hipólito
 MACHADO, Oscar Alfredo
 MATZKIN, Jorge Rubén
 MORELLO, Emilio Pedro
 MURIEL, Néstor Jorge
 VICCHI, Raúl Horacio

AUSENTE CON AVISO:

BARRIOS ARRECHEA, Ricardo Alfredo
 BAYLAC, Juan Pablo
 BENEDETTI, Jorge Enrique
 CABIRÓN, Juan Carlos
 BELLEPIANE, Carlos Francisco
 ESTRADA, Arnaldo Damián
 GABRIELLI, Rodolfo Federico
 HAQUIM, Carlos Guillermo

CON RENUNCIA PENDIENTE DE ACEPTACION DE LA HONORABLE CAMARA:

RICO, Aldo

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la Sesión Preparatoria (43ª reunión, período 1995), de fecha 29 de noviembre de 1995.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios por el que se modifica el proyecto de ley en revisión sobre Régimen Federal de Pesca (203-S-96). (Pág. 4375.)
2. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Mathov con motivo de la incomparecencia del señor secretario de Comunicaciones, doctor Germán Kammerath, a la reunión de la Comisión de Comunicaciones de la Honorable Cámara a la que había sido citado. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales (5.953-D-97). (Pág. 4379.)
3. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. (Pág. 4380.)
4. Moción de orden formulada por el señor diputado Saggese de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de preferencia para el proyecto de ley de los señores diputados Roggero y Castillo (J.L.), y el proyecto de

ley del que es coautor, por los que se modifica el artículo 6º, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de exenciones a aeronaves, buques y artefactos navales (5.213-D-96 y 542-D-97). Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 4386.)

5. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 1 y 3 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4388.)
6. Mociones de orden formuladas por el señor diputado Camacho de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de ampliar el plan de labor con la inclusión de diversos asuntos, y de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio. Es retirada la primera y se aprueba la segunda. (Pág. 4405.)

7. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara:

1. Proyecto de ley que pasan en revisión al Honorable Senado. (Pág. 4408.)

—En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de noviembre de 1997, a la hora 18 y 13:

1

REGIMEN FEDERAL DE PESCA
(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

Corresponde considerar en particular el proyecto de ley aprobado en general sobre Régimen Federal de Pesca (expediente 203-S-96).¹

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución Nacional, deberá indicarse el resultado de cada una de las votaciones.

En consideración en particular el capítulo I, que contiene los artículos 1º y 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: para el artículo 1º proponemos la siguiente redacción: "La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina".

Para el artículo 2º proponemos la siguiente redacción, en reemplazo de la que figura en el proyecto aprobado en general: "La pesca y el procesamiento de los recursos vivos marinos constituyen una actividad industrial y se regularán con sujeción al Régimen Federal de Pesca Marítima que se establece en la presente ley".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: el artículo ha mejorado sustancialmente con esta redacción, pero por razones técnicas sugiero que, al hacer referencia al mayor empleo de mano de obra, como palabra final se coloque "local" en sustitución de "argentina", porque de lo contrario daría la impresión de que solamente estamos favoreciendo a los de nacionalidad argentina y no a la totalidad de la población del país.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La Comisión acepta la modificación sugerida?

Sr. Castillo (J. L.). — La Comisión mantiene la redacción que acaba de proponer porque en ella no se hace ningún tipo de diferenciación hacia los extranjeros que legalmente viven en nuestro país.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo I, que comprende los artículos 1º y 2º, con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo II, que comprende los artículos 3º y 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Proponemos que al final del artículo 3º se agregue el siguiente párrafo: "Cuando se determinen políticas para la explotación de los recursos vivos en las aguas interiores, el Consejo Federal Pesquero deberá priorizar los intereses regionales de cada provincia y contar con la debida autorización de las autoridades de las mismas".

Para el artículo 4º proponemos el siguiente texto: "Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la zona económica exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas indicadas en el artículo anterior.

"La República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la zona económica exclusiva argentina."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: si bien nosotros hemos consensuado los artículos 3º y 4º, porque se han tomado en consideración las solicitudes de distintas provincias respecto del tema de jurisdicción y dominio en una zona determinada, desde el bloque queremos dejar sentado un público reconocimiento a todos aquellos que durante mucho tiempo sostuvimos y aún sostenemos —y hemos peleado para lograrlo—, que el dominio económico de las 200

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 5 de noviembre de 1997, pág. 3844.

millas provinciales algún día tendrá que ser plasmado incluso desde el punto de vista constitucional.

No obstante, este proyecto acepta el dominio y la jurisdicción de las 200 millas para las provincias argentinas; asimismo se ha logrado consensuar la participación de las mismas en el Consejo Federal Pesquero, en cuanto a las aguas interiores y a las tres millas.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, reivindicamos las 200 millas como valor económico de las provincias, y la jurisdicción y el dominio de las 12 millas; en ese sentido, vamos a acompañar con nuestro voto los artículos 3º y 4º, tal cual fueron redactados por la comisión en forma consensuada.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuco Blasco. — Señor presidente: en la línea de lo expresado por el señor diputado Saggese, reivindicamos una demanda permanente de las provincias con litoral atlántico, las cuales además tienen en sus Constituciones reclamos sobre el marco de las 200 millas para dominio y jurisdicción del recurso biológico. No hay que olvidar que debe tenerse en cuenta que los representantes del Parlamento Patagónico que conforman diputados de las seis provincias que integran la región —La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego—, han dado reiteradas muestras de preocupación para que se reconozca el tema de las 200 millas.

En el marco y en la búsqueda del camino de la Argentina nueva, junto con los diputados que integran el Parlamento Patagónico estamos dispuestos a acompañar el planteo de estas 12 millas como área de dominio de los recursos biológicos de las provincias.

Sin embargo, en el artículo no está plasmado un reconocimiento pleno y responsable que contemple la seriedad y la actitud de conservación de los recursos con que las provincias del litoral atlántico puedan administrar los recursos pesqueros.

Está sobreentendido que durante muchos años las pesquerías se manejaron con administraciones absolutamente centralizadas y con una actitud de las provincias que no fue del todo correcta. Sin embargo, la realidad nos muestra que cada día las provincias tomamos con total responsabilidad la necesidad de operar con nuestros propios recursos.

La propia ley de hidrocarburos determina que los recursos hidrocarbúricos del mar correspon-

den a las provincias y que podrá hacerse efectivo ese derecho cuando terminen las concesiones.

En este tema de las aguas interiores y del mar territorial hasta las 12 millas a partir de la línea de base, reivindicamos el derecho de las provincias para manejar y determinar su propia política pesquera.

Por eso planteamos la posibilidad de que se entienda el artículo 3º como lo voy a señalar acompañando, además, al inciso c) del artículo 5º, del que todavía no habló el señor diputado Castillo.

El artículo 3º se refiere a la política de las provincias en aguas interiores, dentro de las 12 millas, determinando que cuando existiera dificultad con el recurso o un interés nacional en cierto tipo de especie, se posibilitará que las políticas del Consejo Federal Pesquero determinen las políticas internas. De modo que el texto propuesto para el artículo 3º sería el siguiente: "Son del dominio de las provincias con litoral marítimo los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y el mar territorial argentino yacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas mediante la ley 23.968, las que ejercerán su jurisdicción a los fines de su exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos marinos".

Asimismo, para el inciso e) del artículo 5º propiciamos la siguiente redacción: "e) La facultad del Consejo Federal Pesquero, de limitar el acceso a la pesca en los espacios marítimos referidos en el artículo 3º cuando comprendan pesquerías declaradas intensamente explotadas o cuando se declare la existencia de interés nacional comprometido en la conservación de una especie o recurso determinado".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. Drisaldi. — Señor presidente: quiero dejar constancia de que los diputados justicialistas que representamos a la provincia de Santa Cruz apoyamos en todos sus términos la propuesta formulada por el señor diputado Corchuco Blasco.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olina. — Señor presidente: deseo realizar dos propuestas: una de forma en relación con el artículo 3º, y otra de fondo referida al artículo 4º.

Entiendo que la presente redacción adolece de un problema de técnica legislativa, pues sos-

tiene que son del dominio de las provincias con litoral marítimo los recursos vivos que poblaren las aguas interiores. En ese punto debería agregarse la siguiente expresión "adyacentes a las líneas de base...". Asimismo, a nuestro juicio el texto debería continuar así "...y el mar territorial argentino", sin mencionar las 12 millas en razón de que es sabido que el mar territorial argentino es de 12 millas, tal como lo establece la propia ley 23.968.

En consecuencia, con el objeto de mejorar la técnica legislativa, sugiero que este texto quede redactado del siguiente modo: "Son del dominio de las provincias con litoral marítimo los recursos vivos que poblaren las aguas interiores adyacentes a las líneas de base y el mar territorial argentino adyacente a sus costas. Ellas ejercerán su jurisdicción a los fines de su exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos marinos".

En lo referido al artículo 4º llamo la atención en el sentido de que se está legislando de un modo que contraría los compromisos internacionales asumidos por el país. Según la legislación internacional en materia de derechos del mar, los países tienen la facultad de establecer mecanismos de preservación vinculados con las especies denominadas sedentarias sólo más allá de las 200 millas de su zona económica exclusiva. Corresponde aclarar que se llaman especies sedentarias aquellas que de alguna forma están adheridas a la plataforma submarina o que se desplazan por ella, como por ejemplo la langosta u otro tipo de crustáceos que no son peces. Esto es lo que sostiene el derecho internacional, que además la Argentina ha suscrito en diferentes instrumentos internacionales.

En consecuencia, si por medio de esta iniciativa pretendiéramos decir que la República Argentina tiene la facultad de establecer regulaciones en materia de recursos transzonales y altamente migratorios más allá de su zona económica exclusiva, no sólo estaríamos violando normas del derecho internacional sino también del derecho interno, en el que están aprobados los convenios internacionales. Por esa razón es que me permito sugerir una redacción que expresa textualmente: "Son de dominio y de jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos, incluyendo las especies sedentarias, existentes en las aguas de la zona económica exclusiva argentina y sobre la plataforma continental argentina. La Nación regulará su explotación de acuerdo a lo establecido en esta ley.

"La República Argentina, en su condición de Estado ribereño, tiene también interés prioritario

en la conservación de las especies sedentarias que se encuentran en el área de alta mar adyacente a su zona económica exclusiva. En consecuencia, mientras no se arribe a un acuerdo con los demás Estados que pesquen esas poblaciones, podrá adoptar en esta última área —de conformidad con el derecho internacional—, todas las medidas que considere necesarias a tal fin".

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Arias.

Sr. Olima. — Insisto en la importancia de que se tenga en cuenta que nuestro país, por las convenciones que tiene suscritas internacionalmente y por lo que constituye el derecho del mar, no tiene capacidad jurídica para regular más allá de las 200 millas sobre las especies transzonales o altamente migratorias. Considero que mantener la actual redacción implicaría caer en un error que debilitaría una norma por la que hemos bregado durante muchos años.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: en el año 1990 presenté el primer proyecto de ley que reconoce los derechos de los estados ribereños provinciales sobre los recursos hasta las 200 millas marinas.

Este ha sido un tema de debate permanente de las provincias patagónicas desde que se empezó a discutir la necesidad de sancionar una nueva ley que regule la actividad pesquera.

La realidad de las cosas es que a partir del momento en que la Argentina sanciona la ley 23.968 se establece que los límites del mar territorial argentino llegan hasta las 12 millas marinas, y que la Nación va a tener la administración sobre los recursos vivos o no vivos del mar hasta las 200 millas.

Sr. Presidente (López Arias). — Señores diputados: en estas condiciones es imposible continuar con la sesión. El murmullo es constante e impide escuchar las palabras del orador. Por lo tanto, la Presidencia solicita a los legisladores que guarden silencio.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Decía que nada obstaría a que se reconociesen los derechos de estados ribereños sobre los recursos hasta las 200 millas. Este tema nada tiene que ver con el límite del mar territorial sino, en todo caso, con la adopción en nuestra legislación de lo establecido en la

Convención sobre los Derechos del Mar, celebrada en Jamaica en 1982. La Argentina ya ha reconocido que el límite de su mar territorial son las 12 millas.

El importante consenso que se logró en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios con la participación de todos los representantes de las provincias patagónicas con litoral marítimo, y el hecho objetivo de que se dé participación a dichas provincias en la administración y disposición de los recursos del mar y en las decisiones de política pesquera —a través de un Consejo Federal Pesquero que va a tener funciones verdaderamente importantes—, hace que, sin dejar de lado la consigna reivindicada por las provincias patagónicas en el sentido de reconocer la propiedad sobre los recursos vivos o no vivos del mar hasta las 200 millas, aceptemos la redacción propuesta por el señor diputado Castillo.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin. — Señor presidente: con respecto al artículo 3º, donde dice: "...el mar territorial argentino adyacente a sus costas...", me parece innecesaria la expresión "adyacente a sus costas".

En relación con el artículo 4º, cuyo segundo párrafo comenzaría diciendo: "La República Argentina, ...", propongo que se inicie de la siguiente manera: "Conforme al derecho internacional, la República Argentina, ...".

Mi tercer comentario se vincula con una interpretación auténtica sobre la redacción de este artículo. Quiero que quede claro que las especies sedentarias que pudiesen estar en la plataforma continental, más allá del límite del mar territorial —cuando éste se descubra y delimite correctamente conforme a las líneas de base—, no implican una renuncia sino todo lo contrario.

Ratifico todo lo que dice sobre las especies migratorias. Hemos estudiado la batalla de Canadá contra los pesqueros españoles, y creo que invocar el derecho internacional y la Convención de Derecho del Mar refuerza esta obligación del Estado argentino de evitar la depredación a partir de la milla 201.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: en la comisión la redacción del artículo 3º ha llevado a una discusión de más de dos años. Recién hoy, a la hora 15 y 40, hemos terminado de acordar la propuesta.

En consecuencia, creo que una modificación a este artículo sería inaceptable, dado el esfuerzo que han hecho los distintos diputados de las diferentes provincias que tienen un litoral marítimo. Por lo tanto, la comisión mantendrá la redacción originaria.

El artículo 4º se refiere a los derechos que tiene el Estado ribereño más allá de la milla 200, de acuerdo con la Convención sobre Derechos del Mar, que fue aprobada por el Congreso mediante la ley 24.543.

La comisión tuvo en cuenta, al redactar esta norma, lo que dice el artículo 2º de la ley que acabo de mencionar, que expresa: "La República Argentina acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, y que es necesaria su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante, que entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta mar, así como el uso de métodos y artes de pesca.

"El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, la República Argentina como Estado ribereño, y los Estados que pesquen en la zona económica exclusiva, deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas de alta mar. Y aquí está la definición que tomó la comisión. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que para cumplir con la obligación que establece la convención sobre prevención de los recursos vivos en su zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias para tal fin.

No creo que con la redacción que propone la comisión estemos afectando este compromiso nacional. Pero tengo que dejar en claro que la República Argentina, así como lo hizo Canadá en su momento, si tiene que salir a defender

sus recursos naturales porque existe depredación —más allá de su zona económica exclusiva—, tiene todo el derecho de hacerlo, porque está preservando sus propias especies. En consecuencia, la comisión mantiene esta redacción.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el capítulo II, que incluye los artículos 3º y 4º, con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el capítulo III, que incluye el artículo 5º. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: habíamos propuesto un inciso nuevo para este artículo 5º, que entiendo no fue tratado en la última reunión de comisión. Dice así: "La facultad del Consejo Federal Pesquero de limitar el acceso a la pesca en los espacios marítimos referidos al artículo 3º, cuando comprendan pesquerías declaradas intensamente explotadas o cuando se declare la existencia de interés nacional comprometido de una especie o recurso determinado". Con esto se estaría completando el mismo espíritu de los artículos 3º y 5º.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: en mi anterior exposición expresé mi propuesta, en línea con la modificación del artículo 3º. Teniendo en cuenta que la Honorable Cámara ha aprobado —yo lo hice— esa modificación, es sobreabundante que se proponga un inciso más al artículo 5º.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin. — Señor presidente: para ser congruente con mi argumentación anterior, voy a solicitar que en el inciso c) se agregue al final "conforme al derecho internacional", porque esto, lejos de debilitarla, refuerza la pretensión nacional.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: la comisión no va a aceptar ninguna modificación a este artículo.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el capítulo III, que incluye el artículo 5º, con la modificación propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

2

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Mathov. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Mathov. — Señor presidente: interrumpo el tratamiento de este importante proyecto de ley porque me parece que es fundamental e imprescindible plantear esta cuestión de privilegio.

Esta Cámara aprobó por unanimidad el 5 de noviembre el dictamen contenido en el Orden del Día Nº 2.074, por el cual se citaba al señor secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, a concurrir hoy a las 10 a la Comisión de Comunicaciones. Sorpresivamente, hace pocos días se recibió en dicha comisión una nota del citado funcionario, fechada el 12 de noviembre, en la que nos hacía saber que no iba a obedecer la citación de la Cámara de Diputados, es decir, que no concurriría al seno de la Comisión de Comunicaciones, aduciendo lo siguiente, en forma textual: "Soy coordinador nacional de una reunión ordinaria del subgrupo de trabajo del Mercosur que va a sesionar en la localidad de Huerta Grande entre el lunes y el viernes de esta semana".

Yo diría, sin querer abundar sobre el particular, que es tomarnos el pelo pretender hacernos creer que una reunión de esa naturaleza puede ser un justificativo para que el secretario de Estado no concorra al seno de la Comisión de Comunicaciones ante la citación que le ha cursado la Cámara. Y, al respecto, quiero poner énfasis en que la citación no ha surgido de la propia Comisión de Comunicaciones sino de la votación unánime de este cuerpo hace solamente dos semanas.

Desde luego, estoy seguro de que a los señores legisladores no les puede pasar por alto que en estos días existe, por lo menos, un sospechoso silencio por parte del secretario de Comunicaciones respecto de un tema trascendente para la economía nacional y obviamente para el Estado. El 7 de noviembre ha vencido el pla-

zo contractual para que el Estado se pronuncie sobre la prórroga de la exclusividad monopólica de las empresas telefónicas que desarrollan su actividad comercial en la República Argentina, es decir, Telecom y Telefónica de Argentina, además de Telintar, que es propiedad de ambas.

La incomparecencia del secretario de Comunicaciones ante esta circunstancia no hace más que redoblar la sospecha de que un negocio de por lo menos 20 mil millones de dólares, que va a desarrollarse en los próximos tres años, no está siendo tratado con la transparencia que sería imprescindible en términos de seriedad por parte del Estado argentino, máxime cuando la convocatoria se ha resuelto por la unanimidad de los señores diputados, es decir, sin distingo de bancadas.

Hubiera sido importante que el secretario de Comunicaciones diera explicaciones acerca del comportamiento pertinaz de no apoyar la labor del Poder Judicial, ya que, como lo han planteado algunos legisladores en otras oportunidades, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el deber de respaldar al Poder Judicial en distintos pronunciamientos.

Por todo ello, es que planteo esta cuestión de privilegio a fin de que la Cámara exprese su desagrado por la incomparecencia del secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, ante la citación que se le había hecho para el día de hoy, y también para que lo emplace a concurrir al seno de la Comisión de Comunicaciones, sin dilación ni justificativo alguno, para el próximo martes a las 14.

Sr. Pichetto. — Pido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia le concede el uso de la palabra para una aclaración, aunque esta cuestión no se discute.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero aclarar que el bloque Justicialista no acompañará el tratamiento preferente de la cuestión de privilegio formulada por el señor diputado Mathov.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar si se acuerda trato preferente a la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por la Capital. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

—Resultado negativa.

Sr. Presidente (López Arias). — La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

3

REGIMEN FEDERAL DE PESCA

(Continuación)

Sr. Presidente (López Arias). — Prosigue la consideración en particular del dictamen sobre Régimen Federal de Pesca.

En consideración el capítulo IV, que comprende los artículos 6º y 7º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: proponemos la modificación del segundo párrafo del artículo 6º de modo tal que quede redactado de la siguiente manera: "Corresponderá al Poder Ejecutivo nacional adecuar las normas que regulen el funcionamiento de los organismos con competencia en materia pesquera a las disposiciones de la presente ley".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: a fin de que no queden dudas acerca de la importancia del artículo 6º y de la creación de la Secretaría de Pesca, para quienes no hayan prestado la suficiente atención basta repasar lo ocurrido hasta hoy respecto del tema que nos ocupa.

No ha habido una conducción adecuada de las políticas pesqueras; el señor secretario Solá ha dicho con absoluta claridad hace muy poco tiempo que se equivocó en las políticas desarrolladas en torno de los convenios con la Unión Europea, y ha aceptado que las malas políticas nos llevaron a la sobrepesca y que había proyectos que no fueron tratados como corresponde.

Hace no mucho tiempo fue dictado el decreto 1.161/97, cuyo artículo 1º —no leeré la totalidad del "Considerando" porque sería terrible—, dice así: "Commútase la multa de dólares estadounidenses ochocientos mil o su equivalente en pesos convertibles de curso legal, impuesta en forma solidaria al armador y propietario del buque pesquero de bandera española 'Arpon', en cabeza de su capitán, en el sumario administrativo número 39/97 del registro de la Prefectura Naval Argentina (Bahía Blanca), por la de dólares estadounidenses trescientos mil o su equivalente en pesos convertibles de curso legal, con igual modalidad de pago".

Por otro lado, el primer "Considerando", dice así: "Que las relaciones entre la República Argentina y el Reino de España atraviesan un momento excepcional en todos los órdenes", y en el segundo leemos lo siguiente: "Que los in"

tercambios de visitas a diversos niveles han demostrado las posibilidades reales de cooperación que existen entre ambos países".

Este decreto está firmado por el señor presidente de la República, el ministro del Interior, Carlos Corach, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Guido Di Tella y el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo.

En realidad, nos hubiera gustado estar discutiendo aquí un decreto que contuviese elementos aportados por una verdadera Secretaría de Pesca que conozca los problemas de la industria pesquera de la Argentina.

Con estos y otros fundamentos adherimos a la creación de la Secretaría de Pesca.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: ante similares expresiones que el señor diputado Saggese formulara en la reunión en que se inició la consideración de este asunto, a partir de un cuadro del que disponíamos ofrecimos información que ya había sido brindada por la autoridad respectiva en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, mediante la que se explica con amplitud de detalle la problemática planteada.

Seré muy breve, señor presidente. Palos porque bogas y palos porque no bogas. La realidad es que la explicación que yo brindara en aquella oportunidad está basada en documentación fehaciente que obra en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Omitiré dedicar más tiempo a este tema, pues no tengo la intención de discutir algunas otras aseveraciones, y en consecuencia solicito la inserción en el Diario de Sesiones del cuadro que he citado —que obra en mi poder—, que contiene información fehaciente para analizar lo que ha ocurrido con la industria pesquera argentina en los últimos ocho años.

Entiendo que mis palabras representan la opinión de la mayoría de los legisladores de la Patagonia, quienes creemos fervientemente que la Argentina dará un paso gigante si concretamos la creación de la Secretaría de Pesca de la Nación. Es preciso otorgar un rango de tal envergadura a una industria de estas características, que es fundamental para la vida tanto de la Patagonia como de la provincia de Buenos Aires. Ojalá que este logro no sufra ningún tipo de recortes ni observaciones por parte del Poder Ejecutivo.

Con esa idea y ese sentimiento, con la necesidad de que la Argentina adquiera madurez

absoluta en esta temática, vamos a aprobar con mucho entusiasmo la creación de la Secretaría de Pesca.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: a fin de completar las propuestas de modificaciones del capítulo IV solicito que el texto del artículo 7º, contenido en el dictamen, sea reemplazado por el siguiente:

"Serán funciones de la autoridad de aplicación:

"a) Conducir y ejecutar la política pesquera nacional, regulando la explotación, fiscalización e investigación;

"b) Conducir y ejecutar los objetivos y requerimientos relativos a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros;

"c) Fiscalizar las capturas máximas permisibles por especie, establecidas por el Consejo Federal Pesquero y emitir las cuotas de captura anual por buques, por especies, por zonas de pesca y por tipo de flota, conforme las otorgue el Consejo Federal Pesquero.

"d) Emitir los permisos de pesca, previa autorización del Consejo Federal Pesquero;

"e) Calcular los excedentes disponibles y establecer, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero, las restricciones en cuanto a áreas o épocas de veda;

"f) Establecer, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero, los requisitos y condiciones que deben cumplir los buques y empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera;

"g) Establecer los métodos y técnicas de captura, así como también los equipos y artes de pesca de uso prohibido, con el asesoramiento del INIDEP y de acuerdo con la política pesquera establecida por el Consejo Federal Pesquero;

"h) Aplicar sanciones conforme al régimen de infracciones y crear un registro de antecedentes de infractores a las disposiciones de la presente ley, informando de las mismas al Consejo Federal Pesquero;

"i) Elaborar y/o desarrollar sistemas de estadísticas de la actividad pesquera;

"j) Intervenir en negociaciones bilaterales o multilaterales internacionales relacionadas con la actividad pesquera conforme la política pesquera nacional;

"k) Reglamentar el funcionamiento del registro de pesca creado por esta ley;

"l) Percibir los derechos de extracción establecidos por el Consejo Federal Pesquero;

"m) Intervenir en el otorgamiento de los beneficios provenientes de la promoción sectorial concedida o a conceder al sector pesquero;

"n) Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran de financiamiento específico proveniente de organismos financieros internacionales y/o que hayan sido otorgados o a otorgar a la República Argentina, conforme a los criterios que determine juntamente con el Consejo Federal Pesquero;

"ñ) Emitir autorizaciones para pesca experimental, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero;

"o) Establecer e implementar los sistemas de control necesarios y suficientes de modo de determinar fehacientemente las capturas en el mar territorial y la zona económica exclusiva y desembarcadas en puertos argentinos habilitados y el cumplimiento y veracidad de las declaraciones juradas de captura;

"p) Realizar campañas nacionales de promoción para el consumo de recursos vivos del mar y misiones al exterior para promover la comercialización de productos de la industria pesquera nacional;

"q) Ejercer todas las facultades y atribuciones que se le confieren por esta ley a la autoridad de aplicación."

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: el capítulo en análisis —que se complementa con el siguiente, vinculado con la creación del Consejo Federal Pesquero—, tiene una trascendencia que no puede pasar inadvertida para los señores diputados, ya que quienes hemos consensuado la redacción del texto en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios —que acaba de leer el señor diputado José Luis Castillo—, advertimos que por fin quedarán sentadas las bases para que, de una vez por todas, exista transparencia en el manejo de la política pesquera argentina, que ha sido signada por una enorme oscuridad.

El hecho de que se concentrasen todas las atribuciones vinculadas a la administración y conservación de los recursos vivos del mar en una sola área ha significado —desde que existe la política pesquera en la Argentina—, que un manto de sospecha recayese de manera permanente sobre cada decisión.

El hecho de que ahora las provincias vayan a participar en la definición de la política pesquera a través de un consejo, que será el órgano máximo que regule la actividad en el país, y

que la autoridad de aplicación vaya a tener la jerarquía que requiere la actividad —lo que significará para el país exportaciones por más de mil millones de dólares al año—, representará para los argentinos la garantía de que se van a poder explotar racionalmente y administrar con sensatez y honestidad los recursos de que disponemos.

De esta forma, no tendremos que padecer lo que hoy sucede como consecuencia de una crisis que ha determinado que más de cien mil kilómetros cuadrados tengan que ser declarados zona de veda para la pesca de merluza. E incluso, como si se tratase de un ser de otro planeta, que vive a miles de kilómetros de distancia de la República Argentina, el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación ha afirmado muy suelto de cuerpo en el diario "Clarín" del día miércoles 12 de noviembre que, si se mantuviese la redacción de un artículo determinado del presente proyecto de la ley —que desde ya ha sido modificado—, se legalizaría la sobrepesca que el Mar Argentino ha sufrido en los últimos tiempos.

Ahora bien, si ha habido sobrepesca y depredación en el Mar Argentino, así como un mal manejo de los recursos, buena parte de esa responsabilidad la tiene el señor secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Felipe Solá. El conduce un sistema que viene de antes y que ha concentrado demasiado poder en un solo funcionario.

El presente cambio significará no sólo mayor transparencia sino que también —desde el momento que va a ser el Consejo Federal Pesquero el que regulará la actividad y el que determinará las penalidades—, contribuirá a que no tengamos que ver azorados en el futuro un decreto como el que se publicó en el Boletín Oficial el mismo día en que el señor Solá dijo los disparates mencionados. Me estoy refiriendo al miércoles 12 de noviembre de 1997, cuando el señor presidente de la República firmó el decreto 1.161/97 por el que se conmuta la multa de 800 mil dólares que se le había impuesto a un buque pesquero español que pescaba ilegalmente en aguas argentinas, porque nos llevamos fenomenalmente bien con el Reino de España, y entonces, ya que somos amigos, cómo les vamos a castigar los barcos que depredan nuestro mar.

El sistema que tuvimos hasta ahora es el que permite disparates como el que acabo de mencionar.

Quienes integramos la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios tenemos la esperanza de que la creación de este Consejo, que dictará políticas verdaderamente representativas del sector, permitirá una mejor administración de los recursos, algo que el país está necesitando.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Campero. — Señor presidente: el artículo 7º omite la letra ñ) y creo que debe incorporarse en honor a las buenas relaciones que tenemos con nuestra Madre Patria.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: ya expresé que tengo pensado incorporar como inserción en el debate de esta tarde mis opiniones respecto de la postura de algunos señores diputados en cuanto a la marcha de la actividad pesquera nacional. Señalo también las responsabilidades compartidas entre la administración nacional y las administraciones provinciales.

Si queremos avanzar en el tratamiento de este articulado y darle hoy sanción al proyecto —eso sería un logro fundamental fruto del modo de conducir la comisión del diputado José Luis Castillo, ya que llevo ocho años en esta Cámara y nunca se logró siquiera un dictamen—, no debemos enfrascarnos en forma permanente en tratar de dirimir cuál ha sido la responsabilidad de las pesquerías argentinas en el tema de las merluzas y de otras especies, porque ello nos haría perder un tiempo valioso.

Ese fue un tema de discusión en la comisión y lo seguirá siendo en otros ámbitos.

Tengo mucha documentación sobre mi banca, pero por respeto a los señores diputados no voy a avanzar en este debate. Además, hay alguien que no está presente en este recinto y por lo tanto no puede debatir; me refiero al secretario Felipe Solá.

Por lo tanto, avancemos en el articulado sin hacer valoraciones que darían lugar a un debate permanente que demandaría horas concluir.

Reitero que voy a solicitar la inserción de mis opiniones, que podrán echar luz sobre algunos temas y que sin duda van a contradecir posturas de varios diputados preopinantes sobre la política pesquera. Ello no significa que deje de asignar parte de la responsabilidad a la administración central y a las administraciones provinciales.

En cuanto a las causas relacionadas con la sobrepesca, deseo recordar las capturas con per-

misos provenientes de empresas quebradas, pesca de merluza sin permiso, incremento de captura de la flota por varios acápites, aumento de HP, mejor arte de pesca, el acuerdo con la Unión Europea con respecto a los buques ingresados y a los buques cedentes de permiso, etcétera, como ya lo señalara semanas atrás. De todo esto tenemos información analítica que echará luz a esta realidad, pero creo que no es materia de esta sesión.

Sr. Presidente (López Arias). — ¿La comisión desea formular alguna observación?

Sr. Castillo (J. L.). — La comisión mantiene la propuesta que formulara.

Sr. Presidente (López Arias). — Con las modificaciones propuestas por la comisión, se va a votar el capítulo IV, que comprende los artículos 6º y 7º.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el capítulo V, que comprende los artículos 8º a 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: la comisión mantiene el texto del artículo 8º tal como figura en el proyecto aprobado en general y propone la siguiente redacción para el artículo 9º:

“Serán funciones del Consejo Federal Pesquero:

“a) Establecer la política pesquera nacional;

“b) Establecer la política de investigación pesquera;

“c) Establecer la captura máxima permisible por especie, teniendo en cuenta el rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según datos proporcionados por el INIDEP. Además, establecer las cuotas de captura anual por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota;

“d) Aprobar los permisos de pesca comercial y experimental;

“e) Asesorar a la autoridad de aplicación en materia de negociaciones internacionales;

“f) Planificar el desarrollo pesquero nacional;

“g) Fijar las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE);

“h) Dictaminar sobre pesca experimental;

“i) Establecer derechos de extracción y fijar cánones por el ejercicio de la pesca;

"j) Modificar los porcentajes de distribución del FONAPE establecidos en el inciso e) del artículo 46 de la presente ley;

"k) Reglamentar el ejercicio de la pesca artesanal estableciendo una reserva de cuota de pesca de las diferentes especies para ser asignadas a este sector;

"l) Establecer los temas, a consideración del Consejo Federal Pesquero, que requieran mayoría calificada en la votación de sus integrantes;

"m) Dictar su propia reglamentación de funcionamiento, debiendo ser aprobado con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de sus miembros."

En el artículo 10 mantenemos el texto del dictamen aprobado oportunamente.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: nosotros hemos aceptado las modificaciones propuestas teniendo en cuenta la importancia de este Consejo Federal Pesquero, la representación que en él van a tener las provincias y el Estado nacional, y algunos incisos donde se le otorga la mayor calificación a los fines de dictar su propio reglamento, con lo cual se asegura una participación pluralista y democrática.

Asimismo, queremos resaltar la incorporación de este artículo 10, por el que existe la posibilidad de crear un consejo asesor con participación de los distintos sectores que tienen que ver con la industria, con lo que el Consejo Federal Pesquero tendrá distintos organismos de consulta a los fines de fijar las políticas para este tipo de industria, y contribuir también a la preservación de los recursos.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. Drisaldi. — Señor presidente: me gustaría que en este momento hubiera atención en el recinto, porque parece que, lamentablemente, seguimos viviendo de espaldas al mar, tal como lo señaló el señor presidente de la comisión el día en que votamos en general este dictamen.

En cuanto a la conformación del Consejo Federal Pesquero, a mi entender —y lo he propuesto a la comisión— debe mantenerse la redacción sancionada por el Senado, con un representante de pesca por cada provincia, otro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y uno del Ministerio de Economía.

Entendemos que es una reivindicación federal; sabemos que la comisión ha trabajado in-

tensamente en este tema, y queremos dejar sentada la posición en cuanto a la conformación del Consejo Federal Pesquero.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: en relación con el inciso e) del artículo 9º, al que dio lectura el presidente de la comisión, debo decir que en las provincias con litoral atlántico, es decir, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, existen instituciones de nivel terciario e institutos de investigación reconocidos especializados en temas biológicos, que cuentan con profesionales experimentados, investigadores y profesores abocados al tema de la captura máxima permisible para el máximo rendimiento sustentable de las especies.

Debo acotar un reciente hecho que tiene que ver con las posibilidades de captura en el litoral atlántico, fundamentalmente en la provincia que represento, que es Chubut. Se trata de la determinación de limitar la posibilidad de pescar en una zona restringida, concretamente en la región de la isla Escondida, respecto de lo cual ha habido durante muchos años informes serios del INIDEP —Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero—, que no se acompañan con información similar desde el punto de vista de la masa biológica de las especies que se capturaban, brindada por biólogos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Fundación Patagonia Natural.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio porque no se puede escuchar al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Decía que este conflicto surgió por una información biológica brindada por el INIDEP que no se correspondía con otra que emanaba de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, de investigadores del Centro Nacional Patagónico, con sede en Puerto Madryn, o de fundaciones de protección de los recursos biológicos, como la Fundación Patagonia Natural. Finalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con la anuencia del Consejo Federal Pesquero aceptó avanzar en un permiso restringido en un área particular que se había anulado previamente. Por ello, considero que sería conveniente que se pudiera evaluar, en forma permanente, información del INIDEP, cotejada con investigadores de la región. Estas instituciones crecen de modo permanente y en

los ambientes federales y en las universidades nacionales esta temática se profundiza cada día más.

En razón de que en las provincias se nos va la vida y el futuro, propongo que en el inciso c) del artículo 7º el Consejo Federal Pesquero no sólo tome la información emanada del INIDEP. En ese sentido propongo la siguiente redacción: "...según datos proporcionados por el INIDEP, teniendo a la vista información complementaria sobre el mismo tema elaborada por instituciones reconocidas de nivel terciario o de investigación ubicadas en las provincias con litoral atlántico".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: adelanto que la comisión no aceptará la propuesta formulada por el señor diputado Corchuero. Baso en el entendimiento de que en el artículo 13 está contemplada su solicitud.

Sr. Presidente (López Arias). — Con las modificaciones propuestas por la comisión se va a votar el capítulo V, que comprende los artículos 8º a 10.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el capítulo VI, que comprende los artículos 11 a 16.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: para el artículo 11 proponemos que al comienzo se elimine la siguiente expresión: "La autoridad de aplicación en conjunto con...". En consecuencia, el artículo 11 quedará redactado del siguiente modo: "El Consejo Federal Pesquero establecerá los objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marinos, correspondiendo al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero —INIDEP—, la planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas con las provincias y otros organismos o entidades, especialmente en lo que se refiere a la evaluación y conservación de los recursos vivos marinos."

"El INIDEP cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de investigación tendientes a evitar la contaminación."

En lo referido al artículo 12 proponemos que al final de su redacción se elimine la palabra "principales", por lo que el texto quedaría así: "El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero —INIDEP—, administrará y dispondrá de los buques de investigación pesquera de propiedad del Estado nacional, conforme a los requerimientos y políticas que oportunamente se establezcan, debiendo determinar anualmente el rendimiento máximo sostenible de las especies."

No propiciamos modificación alguna para los artículos 13, 14, 15 y 16.

Sr. Presidente (López Arias). — Con las modificaciones propuestas por la comisión, se va a votar el capítulo VI, que comprende los artículos 11 a 16.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el capítulo VII, integrado por los artículos 17 a 22.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: proponemos reemplazar el artículo 17 del dictamen emitido oportunamente, por el siguiente texto: "La pesca en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, estará sujeta a las restricciones que establezca el Consejo Federal Pesquero con fundamento en la conservación de los recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañinos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico".

Respecto del artículo 18, sugerimos eliminar la expresión: "La autoridad de aplicación, en conjunto con...", quedando la redacción definitiva de la siguiente manera: "El Consejo Federal Pesquero establecerá anualmente la captura máxima permisible por especie, conforme a lo estipulado en el artículo 9º, inciso c)".

Por otra parte, en el artículo 20 proponemos reemplazar los términos "control nacional" por la expresión "jurisdicción argentina".

En el mismo sentido, sugerimos sustituir en el artículo 21 la expresión "control nacional" por "jurisdicción argentina". Asimismo, proponemos reemplazar el inciso c) por el siguiente texto: "Llevar a bordo y/o utilizar artes de pesca prohibidas". También sugerimos reemplazar el inciso h) por la siguiente redacción: "El ejercicio de actividades pesqueras sin permiso, asignación de cuota correspondiente, así como en contravención a la normativa legal vigente".

Propiciamos, además, el reemplazo del inciso *p)* por el siguiente texto: "La utilización de mallas mínimas en las redes de arrastre, que en función por tipo de buques, maniobras de pesca y especies, no sean las establecidas para las capturas".

Por otro lado, sugerimos el agregado de los siguientes incisos: "*m)* Arrojar descartes y desechos al mar, en contra de las prácticas de pesca responsables;

"*n)* Realizar capturas de especies de talla inferior a la establecida por la normativa legal vigente o declarar volúmenes de captura distintos a los reales, así como falsear la declaración de las especies;

"*p)* Superar la captura permitida por encima del volumen de la cuota individual de captura;

"*q)* Realizar toda práctica que atente contra la sustentabilidad del recurso pesquero y contra las prácticas de pesca responsable, de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación en consenso con el Consejo Federal Pesquero."

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: los incisos propuestos que figuran como *p)* y *q)* deben ser denominados con las letras "*n*" y "*o*", respectivamente.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: creo que en el inciso *n)*, en lugar de decir: "Realizar capturas de especies de talla inferior..." debería sustituirse la palabra "especies" por "ejemplares".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — La comisión acepta la propuesta del señor diputado Olima. La redacción sería la siguiente: "Realizar capturas de ejemplares de especies de talla inferior a la establecida..."

Asimismo, es correcta la observación formulada por el señor diputado Saggese en cuanto a la denominación de los incisos *n)* y *o)*.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el capítulo VII, que comprende los artículos 17 y 22, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

4

MOCION DE ORDEN Y MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Saggese. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: solicito que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de formular una moción de preferencia, con o sin despacho de comisión, para los proyectos de ley contenidos en los expedientes 542-D.-97 y 5.213-D.-96, a fin de que sean tratados en la última sesión del período legislativo en curso. Ambas iniciativas se refieren al tema en tratamiento.

En la comisión hemos acordado la eliminación del artículo 23. Luego de distintas consultas con los especialistas en el tema, entendimos que este artículo no debía integrar el régimen federal de pesca, porque se refiere a exenciones impositivas.

Creímos más ajustada a la práctica legislativa la consideración de un proyecto de ley sobre esta cuestión. Ya han sido presentados varios por legisladores de distintas bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición, tendientes a modificar la ley sobre el impuesto al valor agregado y establecer las exenciones correspondientes a favor de la industria naval argentina.

Al eliminar este artículo, estamos señalando sucintamente dos o tres cuestiones. En primer lugar, ya no entrarán al país barcos nuevos o hasta con tres años de antigüedad con exenciones impositivas.

Este ha sido el primer paso de la comisión —y seguramente lo será de la Cámara— para defender la industria nacional. En segundo lugar, se trata de un consenso para sancionar una ley que coloque a la industria nacional en competencia con la extranjera.

Seguramente luego de este debate y con posterioridad a que la legislación sea sancionada, la industria naval podrá entrar en competencia y construir los buques que sean necesarios para la explotación de los recursos.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: como presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios apoyo la propuesta del señor diputado preopinante. Existe un acuerdo a los efectos de dar tratamiento preferencial en la próxima sesión, con o

sin despacho de comisión, a dos proyectos de ley que se han presentado en esta Cámara que están contenidos en los expedientes 5.213-D.-96 y 542-D.-97.

De esta manera la comisión propone que los artículos 23 y 24 sean eliminados de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia entiende que el señor diputado por Buenos Aires había formulado moción de preferencia, con despacho de comisión. Por eso le solicita al señor diputado que aclare esta cuestión.

Sr. Saggese. — Señor presidente: en primer lugar debo aclarar que había solicitado la eliminación del artículo 23 y no del 24, que se refiere a las exenciones en los combustibles. Nosotros habíamos acordado dejar este artículo. En segundo lugar, había formulado moción de preferencia con o sin despacho de comisión, porque no tenemos tiempo para otra cosa, y la futura ley sería complementaria de la que hoy sancionemos.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: voy a apoyar la eliminación de los artículos 23 y 24 porque, sin duda alguna, son de competencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ya se ha expedido sobre este tema.

Me parece adecuado analizar estos proyectos, pero el artículo 24 tiene un componente impositivo muy alto, por lo que hay que cuantificar qué estamos haciendo.

Sr. Presidente (López Arias). — En primer lugar, se va a votar si la Cámara se aparta de las prescripciones del reglamento.

Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires en el sentido de que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emiten.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la moción.

Corresponde considerar ahora la moción de preferencia, con o sin despacho de comisión, para que la Cámara considere en la última sesión de este período ordinario los proyectos de ley contenidos en los expedientes 5.213-D.-96 y 542-D.-97.

Sr. Camaño. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Camaño. — Señor presidente: para aclarar un poco esta cuestión tengo que decir que la eliminación de los artículos 23 y 24 tiene que ver con lo que vamos a votar ahora. Si todos estamos de acuerdo en que los dos sean testados del proyecto de ley, no tendríamos inconvenientes en apoyar la moción de preferencia. De lo contrario, no podríamos votar esa preferencia. En consecuencia, lo que quiero saber es si todos están dispuestos a eliminar del proyecto de ley los artículos 23 y 24.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: quería aclarar que hoy en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios se llegó al acuerdo de eliminar el artículo 23 y de mantener el 24, que establece el precio sin carga impositiva para los combustibles que utilicen los barcos.

Las razones son bastante sencillas de explicar: el artículo 23 se refiere a todo un régimen especial que permite desde la importación de barcos usados sin ningún tipo de arancel hasta la de insumos para la construcción de buques. Este sistema, que beneficia exclusivamente a la actividad pesquera, debe ser —y en esto había consenso—, considerado en un marco mucho más amplio que se vincule con toda la actividad marítima en la Argentina. Podemos decir que de alguna manera está fuera de la competencia de una ley establecer sistemas para la importación de insumos o barcos, sino que lo que le corresponde es regular la actividad pesquera, tanto a nivel comercial como de investigación.

El artículo 24, contrariamente a lo que ocurre con el 23, establece cosas importantes para el cumplimiento de los fines que tutela este proyecto de ley. Fija un precio especial de los combustibles para los barcos de investigación, así como también para los buques de bandera argentina, a fin de que puedan desarrollar mejor su actividad.

Por eso se había planteado y consensuado en la comisión el mantenimiento del artículo 23. En este sentido solicito la eliminación de dicho artículo, manteniéndose la redacción actual del artículo 24 conforme a lo que habíamos acordado.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: como usted verá, estamos intercambiando opiniones con los especialistas de nuestro bloque en temas impositivos. Creo interpretar que, cuando el presidente de la comisión agregó el artículo 24, lo hizo sobre la base del antecedente que hemos tenido respecto del funcionamiento de las exenciones ya establecidas en la venta de cupos de combustibles.

Por lo tanto, como una decisión sensata, y en la inteligencia de que hemos trabajado con absoluta seriedad en estos temas, vamos a acompañar el primer pedido del presidente de la comisión, es decir, la eliminación del artículo 24, tratando de que cuando se debatan estos dos proyectos que tienen preferencia, también se incorpore al debate el contenido del artículo 24.

Solicito que el señor diputado Flores nos conceda unos minutos para poder intercambiar opiniones y, si es necesario, que pasemos a un breve cuarto intermedio. Seguramente el señor diputado comprenderá que queremos tratar este tema con responsabilidad. Por eso aceptamos la eliminación de ambos artículos para que sean considerados en oportunidad de tratarse los dos proyectos que tienen preferencia.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar la moción de preferencia para que los proyectos de ley contenidos en los expedientes 542-D-97 y 5.213-D-96 sean tratados con o sin despacho de comisión en la próxima sesión o siguientes. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Queda acordada la preferencia solicitada.

5

REGIMEN FEDERAL DE PESCA

(Continuación)

Sr. Presidente (López Arias). — Continúa la consideración en particular del proyecto de ley aprobado en general sobre Régimen Federal de Pesca.

Corresponde votar la eliminación del capítulo VIII, que comprende los artículos 23 y 24.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: hemos estado conversando y si bien esto se había acordado en la Comisión de Intereses Marítimos, Flu-

viales, Pesqueros y Portuarios, habida cuenta de que se ha aprobado la correspondiente preferencia y el tema será tratado en la próxima sesión, retiré mi propuesta de mantener el artículo 24.

Sr. Presidente (López Arias). — En consecuencia, se va a votar la supresión de los artículos 23 y 24.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia reordenará la numeración del articulado.

En consideración el capítulo IX, del dictamen, que pasa a ser VIII, que comprende los artículos 25 a 35, ahora 23 a 33.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: respecto de este capítulo vamos a proponer las siguientes modificaciones.

En el artículo 25, que pasa a ser 23, en su inciso a) se reemplazan las palabras "control nacional" por "jurisdicción argentina". El inciso c) queda redactado así: "Permiso temporario de pesca: serán otorgados a buques arrendados a casco desnudo en las condiciones y plazos establecidos en la presente ley. El mismo tratamiento se aplicará para los buques de pabellón extranjero que operen en las condiciones de excepción establecidas por esta ley". Además, se elimina el inciso d) original, quedando en su reemplazo el texto del inciso e).

En el artículo 26, ahora 24, las palabras "control nacional" se reemplazan por "jurisdicción argentina". Por otro lado, se suprime del segundo párrafo la expresión "o en trámite de inscripción".

El texto del artículo 27, que pasa a ser 25, es reemplazado por el siguiente: "Será obligatorio desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos. En casos de fuerza mayor debidamente acreditados o cuando los buques se encuentren autorizados a operar en aguas la descarga en puertos extranjeros y el traspaso en los puertos argentinos o en zonas de desembarque habilitadas en las radas de los mismos".

A último momento, respecto del inciso 2 del artículo 28, ahora 26, se resolvió reemplazar "hasta veinte años" por "hasta treinta años".

En relación con el artículo 29, que pasa a ser 27, que ha generado quizá el mayor debate no sólo en este recinto sino también en el pueblo, proponemos como texto consensuado por todos los bloques que componen la Comisión de In-

tereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, el siguiente: "A partir de la vigencia de esta ley se asignará una cuota de captura a cada permiso de pesca, tanto a los preexistentes como a los que se otorguen en el futuro.

"Facúltase al Consejo Federal Pesquero para que reglamente y dicte todas las normas necesarias para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros mediante el otorgamiento de cuotas de captura por especie, por buque, zonas de pesca y tipo de flota.

"Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la captura máxima permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas.

"Para establecer los parámetros de funcionamiento del régimen de administración pesquera y la asignación de las cuotas de captura, el Consejo Federal Pesquero deberá priorizar los ítem siguientes: 1) Cantidad de mano de obra nacional ocupada; 2) Inversiones efectivamente realizadas en el país; 3) El promedio de toneladas de captura legal de cada especie efectuado durante los últimos ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1996, por buque o por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario; 4) El promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada especie en los últimos ocho (8) años, medidos al 31 de diciembre de 1996, por buque o por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario; 5) La falta de antecedentes de sanciones aplicadas por infracción a las leyes, decretos o resoluciones regulatorias de la actividad pesquera.

"Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles de conformidad con las condiciones que establezca el Consejo Federal Pesquero. No se permitirá la transferencia de cuotas de capturas de buques pesqueros fresqueros a congeladores o factorías.

"El Consejo Federal Pesquero podrá reservar parte de la captura máxima permisible como método de conservación y administración, priorizando su asignación hacia sectores de máximo interés social."

Asimismo proponemos reemplazar el artículo 30 del dictamen —ahora 28—, por el siguiente:

"Los permisos de pesca son habilitaciones otorgadas a los buques solamente para acceder al caladero, siendo necesario para ejercer la pesca contar con una cuota de captura asignada o

una autorización de captura en el caso de que la especie no esté cuotificada.

"Los permisos o autorizaciones de pesca asignados a buques pertenecientes a empresas o grupos empresarios a quienes se les dicte la sentencia de quiebra o hubiesen permanecido sin operar comercialmente durante ciento ochenta (180) días consecutivos, sin ningún justificativo de acuerdo con lo que establezca el Consejo Federal Pesquero, caducarán automáticamente.

"Los permisos o autorizaciones de pesca asignados a buques que se hundieran o ya estuvieran hundidos, y no hubieran cumplido con el reemplazo del buque siniestrado dentro de los plazos otorgados por la autoridad de aplicación, caducarán automáticamente."

También proponemos la incorporación de un nuevo artículo luego del 30 del dictamen —ahora 28—, que cambiaría, por ende, la numeración posterior del articulado.

El contenido de la nueva disposición, que sería el artículo 29, dice: "El ejercicio de la pesca de los recursos vivos en los espacios marítimos, bajo jurisdicción argentina, estará sujeto al pago de un derecho único de extracción por especie y modalidad de pesca, el que será establecido por el Consejo Federal Pesquero".

Del mismo modo, propiciamos el reemplazo del texto del artículo 32 del dictamen —que pasa a ser 31—, por el siguiente: "En ningún caso podrá disponerse de los productos de la pesca sin someterlos previamente al control sanitario de los organismos competentes, el que deberá ejercerse sin entorpecer la operatoria pesquera, en las condiciones que establezca la reglamentación. La autoridad de aplicación reglamentará el transporte y la documentación necesaria para el tránsito de productos pesqueros".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Vázquez. — Señor presidente: tal como lo afirmara el señor diputado Castillo, la redacción final del artículo 29 ha sido objeto de discusión, de sugerencias y de posicionamientos desde los distintos sectores involucrados en la actividad pesquera.

Las objeciones a la redacción de la norma sancionada por el Senado respondían básicamente a tres criterios. Uno de orden estrictamente ambiental que responde a la inquietud acerca de si las cuotas constituyen el mejor instrumento de política pública para garantizar la sustentabilidad de la explotación del recurso ictícola en nuestros mares, porque podrían exis-

tir otros instrumentos del mismo orden que pudieran cumplir esta función de manera más eficaz.

Hubo críticas desde el punto de vista de la actividad económica a partir de una discusión que se abre con la incorporación de las cuotas como nueva figura jurídica, en el sentido de si esto puede definirse como una privatización de la explotación de los recursos marítimos en nuestro país, y sobre las bases en las que se sustenta este régimen de cuotificación, dado que estamos aludiendo ni más ni menos que a la explotación de un recurso natural que es propiedad de todos los argentinos y que a partir del establecimiento de una cuota global y de cuotas individuales asignadas a particulares genera un derecho en cabeza de éstos con la peculiaridad de la transferibilidad de estas cuotas.

También se han acercado sugerencias y críticas a este artículo 29 desde algunos sectores de la actividad pesquera que pretendían que en su redacción se privilegiaran las inversiones que se hacen en nuestro país y las que generan mayor capacidad de mano de obra, algo que nos ha parecido sustancial. Sin embargo, el régimen de cuotas ofrece no sólo ventajas sino críticas que se han hecho desde distintos sectores; incluso, en algunos países en los que efectivamente se aplica.

No obstante, a pesar de que existe una biblioteca que nos habla de las ventajas del régimen de cuotas, y otra distinta que nos señala sus inconvenientes, me parece central dejar sentada una opinión respecto de un esquema que tiene que ver con la naturaleza que posee este instrumento de política pública.

El régimen de cuotas se viene utilizando en algunos países no solamente en el ámbito pesquero, sino también en otras actividades que generan un fuerte impacto ambiental, por la contaminación que generan. El concepto sería el siguiente: quien obtiene una riqueza de esa explotación tiene que pagar a la sociedad porque se asegura un beneficio mayor del que recibe el resto de la población por la utilización de un recurso que es propiedad de todos. A partir de este esquema, el sistema capitalista genera el régimen de cuotas con el atractivo económico de la transferibilidad; esto es, la posibilidad de que sean negociadas por la capacidad potencial de explotación de un recurso natural.

Sobre la base de estos esquemas los países que aplican el régimen de cuotas establecen la onerosidad, es decir que aquel que quiera acceder a la explotación de ese recurso y obtener una ri-

queza debe pagarle al Estado, más allá de lo que a su vez le paga por el ejercicio concreto de esa capacidad.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor José Gabriel Dumón.

Sra. Vázquez. — En el caso que nos ocupa, de la lectura del artículo 29 —ahora 27—, y en concordancia con el resto del articulado, surge que estos dos conceptos están claramente distinguidos; por un lado, la capacidad —que es la cuota—, y por el otro, el ejercicio concreto de esa capacidad, que se refleja en el permiso de pesca.

En la norma aparece la contraprestación que debe pagar el privado por el ejercicio concreto de la pesca. Pero de la ley no surge que el privado deba pagarle al Estado, y por ende a la sociedad, por la capacidad potencial de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho.

Es importante distinguir ambas cuestiones porque al ser las cuotas transferibles —esto es, negociables—, aunque con límites que impone la propia ley, lo cierto es que la cuota en sí misma genera un derecho individual en cabeza del particular que puede ser negociable y tiene un valor.

Tampoco surge de la ley —entiendo que sobre el particular habrá una normativa que hará el Consejo Federal Pesquero, pero sería interesante saber de qué estamos hablando, porque se vincula con el atractivo económico que puede tener la cuota—, por cuánto tiempo se va a otorgar esa capacidad potencial que se refleja en la cuota.

Estamos en una situación de hecho en la que existe sobrepesca. La ley establece una captura legal de 390 mil toneladas y en realidad se produce una extracción de 600 mil toneladas. Por ello, actualmente se excede la cuota legal a la que se hace referencia en el propio proyecto.

De acuerdo con la redacción del artículo 29 los privados accederían no sólo al permiso de pesca, sino también a esa capacidad, que, por otra parte, no sabemos por cuánto tiempo se otorga. Obviamente, esto incide en el valor que esa cuota tenga en la posible negociación que se lleve a cabo. Todo esto sobre la base de la negociación de un recurso natural que es patrimonio de todos los argentinos y por el que el privado no paga originariamente, a pesar de que pueda negociar esa capacidad a partir de su obtención.

Es necesario conocer estos datos para que el sistema funcione con coherencia.

Si utilizamos un instrumento de política pública capitalista en un régimen capitalista, en un esquema en el que es necesario velar para que no exista sobreexplotación de un recurso natural, debemos ser coherentes. Otorgamos una riqueza que se incorpora al patrimonio de algunos y por lo tanto sería lógico que el Estado argentino fijara inicialmente un valor a la cuota para que exista coherencia y razonabilidad en la aplicación del instrumento, salvo que se decida hacer caer la transferibilidad de la cuota, en cuyo caso estaríamos utilizando el instrumento de política pública con la finalidad de una adecuada y racional explotación de un recurso natural. La idea es que cuando el privado deje de utilizar esa capacidad, ella retorne al Estado para que él sea quien nuevamente la adjudique.

Estas son las dudas que me genera la redacción de este artículo 29, que ha pasado a ser 27.

Quiero decir, entonces, que voy a solicitar autorización al cuerpo para abstenerme de la votación de este artículo. Podríamos votarlo favorablemente únicamente si guardara coherencia con el instrumento que estamos utilizando. Es decir: o es transferible la cuota y entonces el Estado cobra originariamente para otorgar esa capacidad, que después el privado va a seguir negociando, o la cuota se vuelve intransferible y entonces la otorgamos a título gratuito.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don Rafael Pascual.

Sra. Vázquez. — Ambas cosas son posibles y a su vez coherentes. Una cuestión es hacer jugar la transferibilidad por un lado, o sea la capacidad de negociar y lucrar sobre la cuota, y no sobre la explotación, porque aquel que quiere extraer va a tener que pagar por cada unidad que extrae, tal cual lo establece la propia ley. Y otra cuestión es que votemos una ley por la cual el conjunto de los argentinos pague la habilitación que le damos a los privados, sabiendo que estas cuotas, entre otras cosas, para ser económicamente rentables o atractivas deberán ser otorgadas por plazos superiores a los diez, quince o veinte años.

Por lo tanto, sugiero que se revea el artículo en lo que respecta a la transferibilidad o la onerosidad; de lo contrario, si se mantiene la redacción, pido autorización al cuerpo para abstenerme de votar.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Patterson. — Señor presidente: en principio le pediría al señor diputado Castillo que tome en cuenta el artículo 25 del dictamen porque, a mi entender, en lugar de hablar de los artículos "8º y 10 de la presente ley", tendría que referirse a los artículos 7º y 9º.

En segundo lugar, tal como anunció el presidente de la comisión y lo reiteró la señora diputada preopinante, estamos entrando en el tema más novedoso y yo diría central del nuevo régimen de pesca en nuestro país.

La señora diputada Vázquez pidió autorización al cuerpo para abstenerse de votar al entender que existe una contradicción; y entiendo que de alguna manera y tal como lo expresó la señora diputada, le asisten razones.

Junto con el señor diputado Roig, allá por 1994, soy autor del primer proyecto de ley que establece el sistema de cuotas individuales de pesca para llevar adelante en el país, con otros ingredientes que son muy importantes, entre ellos la creación del Consejo Federal de Pesca con la participación de las provincias, algo que a nuestro juicio es muy necesario.

Lo que es cierto es que las cuotas individuales de pesca contienen en sí mismas un fuerte incentivo conservacionista, tal como lo señaló la señora diputada.

En el caso de nuestro país, muchos advirtieron sobre la posibilidad de que copiar algún sistema de cuotas aplicado en otro país no necesariamente acarrearía la concreción de los objetivos primarios buscados con su implementación.

A lo largo de estos cuatro años y en especial en los últimos dos, hemos ido adaptando este texto a la realidad argentina y en particular a la del sector pesquero, que, a nuestro juicio, están contenidas en él.

En lo referido al pago inicial, en otros países las licitaciones de las cuotas individuales se realizan anualmente. Es decir, las cuotas individuales se otorgan por diez años y van perdiendo un 10 por ciento por año. Entonces, para mantener la capacidad de pesca o de captura de determinadas especies las empresas deben licitar nuevamente ese porcentaje o uno mayor para poder continuar desenvolviéndose en el sector pesquero con la misma intensidad.

Hemos mantenido reuniones con muchos empresarios pesqueros preocupados por esta cuestión, en especial los de capital genuinamente argentino, en razón de que los extranjeros con seguridad cuentan con mayores facilidades para financiar la licitación de cuotas y en definitiva poder quedarse con una porción importante de la cuota global. Por ese motivo se han ido in-

introduciendo algunas enmiendas, y por ejemplo se incluyó una cláusula antimonopólica según la cual el Consejo Federal Pesquero establecerá pautas con el fin de que no sean sólo algunas empresas las que se queden con una parte significativa de la cuota global, lo que nos parece lógico. Por otra parte, ésta era una de las mayores inquietudes del sector armador, sobre todo de los buques pesqueros de menor tamaño, comúnmente denominados "fresqueros".

No sólo hemos incluido una cláusula antimonopólica, sino que, además, hemos establecido la imposibilidad de transferir la cuota desde los buques fresqueros a los congeladores, aunque no a la inversa. Esto significa que sin ningún inconveniente un buque congelador puede transferir su cuota total o parcialmente a buques fresqueros.

En el texto en consideración no partimos de un modelo absolutamente virgen, de un caladero que no tiene problemas y de pesquerías íntegras en su potencial, sino todo lo contrario: un caladero seriamente lesionado con motivo de las inadecuadas políticas llevadas adelante por el poder administrador. En ese sentido, aquí ha sido reconocida por todos y es pública la crisis por la que atraviesa el recurso más importante que tiene nuestro mar territorial: la merluza hubbsi. Esta crisis ha obedecido a la carencia de una herramienta adecuada que impidiera que los barcos continuaran pescando en determinado momento.

En nuestra opinión, y aun con todas estas aclaraciones, la puesta en marcha del sistema de cuotas producirá un contraste muy fuerte con la actual situación. Sostenemos esto, pues hoy en la República Argentina no existen restricciones —con respecto al tiempo y en cuanto al tipo de especies— para los barcos que tienen permiso de pesca. Esto motivó que en muchas ocasiones se haya hecho trampas con los permisos de pesca, tal como sucedió con el convenio con la Unión Europea, que ha producido una presión muy fuerte en nuestro caladero, conduciéndolo a la lamentable realidad que hoy padece.

De modo tal que no somos ajenos a las legítimas preocupaciones expresadas por la señora diputada preopinante porque creemos que a lo largo de estos años hemos llegado a una redacción que estimamos la más adecuada para el momento que atraviesa nuestro caladero y, sobre todo, la actualidad de los pequeños y grandes empresarios que actúan en el sector pesquero argentino. Son muy pocos los que estarían en capacidad de desembolsar una suma de dinero para obtener una cuota, y esto le-

sionaría la posibilidad de seguir trabajando, con las consecuencias que ello implica.

Consideramos que la actual redacción es la que se adecua más a nuestra realidad. No se trata de una imposición de un modelo extranjero o copiado de otro lado. Se ha tenido en cuenta la opinión de cada una de las provincias y de los señores diputados que estuvimos trabajando durante mucho tiempo sobre este tema en el seno de la comisión.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuco Blasco. — Señor presidente: teniendo en cuenta las últimas palabras pronunciadas por el señor diputado Paterson, vale la pena reconocer el trabajo muy comprometido que han llevado a cabo sobre esta temática, por lo menos desde 1989, año en que asumí como diputado, el personal de las comisiones de Industria y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, así como los asesores de los diversos legisladores. En estos últimos dos años ha habido un esfuerzo permanente por trabajar en esta temática.

Compartimos lo inicialmente expresado por el señor presidente de la comisión, cuando se refería a la cantidad importante de horas de trabajo que insumió arribar a este consensuado artículo 29 del dictamen. Si algunos legisladores hubiéramos actuado con rigidez respecto de los parámetros que sosteníamos, hubiéramos echado por tierra la posibilidad de sancionar esta ley, y es precisamente eso lo que no queríamos que ocurriera. Por el contrario, pretendemos establecer el marco legal que está necesitando la Argentina desde hace mucho tiempo y que estamos a punto de concretar cuando, luego de la sanción por parte de esta Cámara, sea tratado en el Senado y, posteriormente, promulgado por el Poder Ejecutivo.

Cabe señalar que en las reuniones de trabajo se tomó en cuenta la opinión de la mayoría de los diputados de las provincias patagónicas, así como también la de los diputados de la provincia de Buenos Aires. A la luz de dicho estudio surgió este artículo que ha sido leído por el presidente de la comisión. En el año 1993 presentamos un proyecto con el señor diputado Roig, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, donde ya hablábamos de licitaciones respecto del tema de pesquerías e incorporábamos el moderno concepto de cuotificación de captura por buque, por zona, por flota y por especie. Se trata de una idea que fue utilizada en forma exitosa por países como Noruega, Estados Unidos, Australia, Canadá e Islandia.

En una de las reuniones de trabajo fue leído textualmente el pedido de modificación del artículo 29 —que pasaría a ser 27—, que nos fuera entregado por el actual Consejo Federal Pesquero, que lleva las firmas de los representantes de nuestras provincias y del secretario del área a nivel nacional.

A partir de allí hemos logrado un consenso respecto de este artículo 29 del dictamen, que estamos dispuestos a acompañar. El espíritu de lo que ha querido decir el legislador quedará plasmado en esta sesión. Es nuestra intención que, cuando el Consejo Federal Pesquero se refiera a los marcos temporales y a las cuotas, no deje de lado los buques que se han incorporado en 1997 a la captura con permisos legales y que no estarían dentro de la redacción del artículo 29, porque lo calificamos hasta el 31 de diciembre de 1996. De modo que queda en el espíritu del cuerpo la necesidad de que el Consejo Federal Pesquero tome en cuenta, para la cuotificación y entrega de permisos, a aquellos buques que han operado como nuevos —es decir, con permisos legales— en 1997.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin. — Señor presidente: esta vez espero tener más suerte con el señor miembro informante de la comisión.

El artículo 29 —ahora 27— tiene varias modificaciones que son el producto de una ardua negociación en la comisión. Allí ha aparecido una fórmula que señala que, para establecer los parámetros de funcionamiento del régimen de administración, el Consejo Federal deberá dar prioridad a varios ítem, como el promedio de toneladas de captura medido al 31 de diciembre de 1996.

Los ocho años que se establecen me parecen exagerados. No obstante, es respetable el acuerdo que se ha logrado en la comisión. Lo que ocurre es que la partícula "al", que es una contracción de la preposición "a" y el artículo "el", no me parece apropiada para figurar antes de una fecha. ¿La preposición "al" significa desde o hasta?

En segundo lugar, la pregunta es hasta cuándo, porque existen en circulación algunas versiones y quiero que haya una interpretación auténtica sobre la cuestión. Este criterio debe aplicarse para la primera vez que se asignen cuotas de captura y no para siempre porque, si no, el derecho de los que están se convierte en una institución medieval y corporativa en relación con quienes pueden incorporarse en el futuro a este negocio.

También hay algunos problemas terminológicos. En el artículo 31 —que pasaría a ser 30— se habla del pago del derecho de extracción, mientras que en el artículo 9º, entre las facultades del Consejo, figura la de establecer derechos de extracción y fijar cánones. ¿Qué son los cánones? Estos problemas semánticos se prestan a confusiones, por lo que resulta necesario hacer las aclaraciones correspondientes en este momento.

Finalmente, las reformas propuestas por el señor diputado Castillo al artículo 30 —ahora 28—, dicen que los permisos de pesca caducarán cuando las empresas quiebren o hubieren permanecido sin operar comercialmente durante 180 días consecutivos. Si esto se aplica hacia el futuro, me pregunto cuál es la razón para establecer hoy una amnistía a favor de los titulares de derechos de pesca que ya incurrieron en esas causales.

Si no tuvieran inversión pesquera y sólo dispusieran del derecho de pesca, estaríamos otorgando facultades para comercializar un título o un derecho adquirido, que puede prestarse a oscurecer la naturaleza del negocio y el espíritu de la ley, que es transparentar las asignaciones por cuota, por flota, por especie y con el debido cuidado por el caladero que, como todos saben, ha sufrido un abuso durante el corriente año.

En síntesis, solicitó que en el artículo 29 —que pasó a ser 27—, se aclare categóricamente cuál es la relación entre la contracción "al" y la fecha que allí figura. En segundo lugar, quiero que se establezca que el criterio es para la primera vez que se asignan cuotas de captura y que no deja sentado un precedente porque, si no, éste es un negocio absolutamente cerrado para quienes ya están en él. En tercer lugar, se debe estipular qué quiere decir "canon", de acuerdo con lo prescripto en el inciso h) del artículo 9º. Finalmente, conviene examinar si en el artículo 30 —ahora 29— no habría que hacer extensiva la causal de quiebra o falta de actividad durante 180 días a los ocho años anteriores, para que la ley sea pareja en cuanto al cuidado que se pone en privilegiar las inversiones activas.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. Carrió. — Señor presidente: voy a apoyar la postura de la señora diputada Vázquez. Me ha convencido porque en realidad lo que se está dando es una capacidad sujeta al ejercicio o al no ejercicio, y sólo se paga por el ejercicio. Pero la capacidad misma vale y puede ser intercambiable en el mercado. Entonces esto es

muy claro: se está regalando una capacidad que a su vez puede ser transferida por un precio.

En consecuencia, la solución sería que las transferencias de esas cuotas tengan que pagar un canon al Consejo en el momento de la transferencia. De lo contrario, estaríamos regalando un activo financiero para ser comercializado por particulares. Puedo poner un ejemplo más sencillo: obtengo gratuitamente la concesión de un bingo y luego la vendo por un alto precio en dinero. Esto es lo que va a suceder finalmente con las cuotas entendidas como capacidad y con valor en dinero.

En consecuencia, solicito que quede constancia en el Diario de Sesiones de que votaré negativamente este artículo si no se tiene en cuenta mi sugerencia.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Acevedo. — Señor presidente: quienes no formamos parte de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y que, consecuentemente, no hemos participado de los largos debates que se han llevado a cabo durante estos años, hay cosas que no llegamos a comprender. Pero es importante dejar precisadas algunas cuestiones en este debate, por su utilidad para la interpretación futura de algunas instituciones que hoy se consagran.

En primer lugar, debemos tener presente que los peces de los mares interiores son susceptibles de apropiación privada. Al respecto puedo decir que el artículo 2.343 del Código Civil, desde la época de Vélez Sarsfield, dice lo siguiente: "Son susceptibles de apropiación privada: 1) los peces de los mares interiores, mares territoriales, ríos y lagos navegables, guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima o fluvial".

La primera cuestión que debemos discutir es cuál es la naturaleza jurídica de los permisos de pesca y de la cuota, es decir, si son concesiones que otorga el Estado —y por lo tanto son revocables—, o si, por el contrario, generan en los titulares de dichos permisos un derecho adquirido del que su titular puede ser privado únicamente a través de la institución de la expropiación pública, a partir de la inviolabilidad de la propiedad que establece el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Estas no son cuestiones que pueden quedar ausentes de definición en el debate que aquí se haga sobre este proyecto de ley. Consideramos que los permisos de pesca —que consecuentemente permiten acceder a las cuotas— son con-

cesiones del Estado y que, en la medida en que se cumplieren las pautas legales y reglamentarias que establezca el Consejo Federal Pesquero, podrá haber apropiación privada de los peces que existen en el Mar Argentino. Esta es una cuestión central porque tiene íntima relación con aquello a lo que se refirió el señor diputado Stubrín, y también de alguna manera contesta un aspecto de la posición de la señora diputada Vázquez.

En primer lugar, para acceder a la pesca o a la apropiación privada, a partir de la vigencia de esta ley se asignará una cuota de captura a cada permiso de pesca, debiéndose pagar anualmente un arancel por dicho permiso. Aquí juega la correlación de los artículos 29 y 44 pero además la ley faculta al Consejo Federal Pesquero a que reglamente la actividad y dicte todas las normas necesarias para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros mediante el otorgamiento de cuotas de captura por especie, buque, zona de pesca y tipo de flota.

Se determina que el Consejo podrá reservar parte de la captura máxima permisible como medida de conservación y administración, dando prioridad a su asignación a los sectores de máximo interés social.

Con estas palabras quiero señalar que el régimen tiene congruencia por cuanto los peces son pasibles de apropiación privada y para acceder a una cuota hay que tener un permiso, para cuya titularidad debe pagarse anualmente un arancel.

Quizás esto se debería llamar canon, que es el modo en que se pagan las concesiones, es decir, el término que delimita el concepto de concesión, porque se mantiene la propiedad en el Estado y es un permiso para acceder, bajo determinadas condiciones, a la apropiación privada de los bienes que menciona el Código Civil.

El mar ya está privatizado, lo que sucede es que no se pueden otorgar permisos de pesca porque no es posible pescar más de lo que se está pescando. Como decíamos al aprobarse en general este proyecto, se ha llegado a este fin no querido por el camino del absurdo, por otorgar permisos de pesca en forma indiscriminada y por los negocios que se hacían en los tribunales argentinos con las quiebras, como bien explicitaba, entre otros, el señor diputado Castillo.

Con respecto a la transferencia, debo señalar que no es solamente un instrumento financiero,

porque está sujeta a la conformidad que establezca el Consejo Federal Pesquero en tanto y en cuanto se den las condiciones determinadas en el artículo 29 —ahora 27—, para el otorgamiento de la cuota de captura; es decir que se regula la transmisión o transferencia de las cuotas. Para acceder a una cuota previamente se requiere un permiso, y para obtenerlo hay que pagar anualmente un arancel. El Estado argentino recibirá un estipendio, una retribución, cada vez que alguien acceda a la cuota que habrá de fijar el Consejo Federal Pesquero.

Como señalara la señora diputada Vázquez, es cierto que hubo dos criterios. Uno de ellos triunfó, y de allí la redacción del artículo al que estoy haciendo referencia. Sin embargo, algunos creíamos que en el caso de que quien hubiera accedido a la cuota no la utilizara, ésta debía volver hacia el Consejo Federal Pesquero para ser otorgada a otro titular mediante un sistema de licitación. Finalmente, la necesidad de la sanción de esta norma llevó a decidir por el otro régimen.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: invertiré el orden de prelación de los artículos a considerar para ir de lo principal a lo accesorio.

Desde ya, no puedo dejar de reconocer que la actual redacción del artículo 29 —que pasa a ser 27—, ha mejorado sustancialmente respecto de los textos originalmente propuestos. Se han recogido preocupaciones que van desde la industria pesquera nacional hasta sectores ecologistas como Greenpeace, al impedirse el traspaso o la cesión de licencias de buques de menor porte a buques de mayor porte.

De cualquier manera, quiero sumarse a todas las dudas expuestas por diferentes diputados preopinantes, y aunque sé que difícilmente habré de tener éxito en mi propuesta —porque el consenso alcanzado es producto de un mecanismo trabajoso—, aunque más no sea para el Diario de Sesiones deseo referirme a la posibilidad de implementar mecanismos que realmente otorguen transparencia al sistema de adjudicación de cupos o de cuotas de pesca.

Con el criterio establecido en el artículo 29 estamos fijando un mecanismo muy similar al de la cuota Hilton en materia de carnes, pero todos sabemos perfectamente que la evolución y el esquema de manejo de dicha cuota carece de transparencia. Aunque es probable que la situación mejore con la apertura del comercio

de carnes a raíz de la erradicación de la aftosa, los argentinos hemos sufrido durante muchos años como consecuencia de ese esquema. Sin embargo, hoy insistimos con la aplicación de un mecanismo absolutamente equivalente respecto de la pesca.

Queda una cantidad de interrogantes que van desde los planteados por el señor diputado Stubrin —cuya propuesta sería necesario incorporar al texto del artículo—, hasta los que hemos formulado otros legisladores en torno de la falta de transparencia en la adjudicación de los cupos.

Lo que se ha dicho es real. Más allá de que hablemos de canon o arancel, todos sabemos que el pago que anualmente se hace por el mantenimiento del servicio de pesca, más que un canon o arancel prácticamente parece una patente. De esta manera se mantiene la falta de transparencia en la adjudicación de las cuotas.

Por lo menos con la intención de sentar un precedente, quisiera señalar la siguiente incongruencia. El Consejo Federal Pesquero tendrá la obligación de preservar el recurso, pero podría suceder —como de hecho ha ocurrido muchas veces—, que las cuotas concedidas excedieran realmente el máximo de captura permisible. Esto significa que es muy posible que, si adjudicamos permisos de pesca y a estos últimos no se les da la característica de concesión que señalaba el señor diputado Patterson, se produzcan inconvenientes. Hasta el momento el permiso de pesca ha sido casi un derecho adquirido al extremo que todos sabemos que se han presentado recursos de amparo a fin de que una empresa quebrada estuviese en condiciones de transferir su permiso o cuota pesquera. De tal manera que hasta el presente el Estado no ha podido retrotraer la situación, y además ha quedado como un antecedente jurídico consolidado el hecho de que una vez que alguien posee una cuota de pesca adjudicada parece que ese derecho es absolutamente irreversible, sin importar si de esta manera se está comprometiendo o no el futuro de los recursos.

Todo esto sería subsanable utilizando un mecanismo simple sobre el que quiero llamar la atención. Me pregunto cuál es la razón por la que, en vez de discriminar cuotas por tipo de buque, que trae privilegios para ciertos sectores —ya que por ejemplo los buques de pequeña envergadura pueden operar desde Mar del Plata, pero no desde la Patagonia—, no usamos un mecanismo más simple que es el de la oferta y la demanda.

Sr. Castillo (J. L.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Olima. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pascual). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: a efectos de interpretar el pensamiento del señor diputado Olima le ruego que aclare qué entiende por barco pequeño y qué interpreta por operar desde Mar del Plata o desde el Sur.

Sr. Presidente (Pascual). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: hay zonas de menor desarrollo relativo, como sucede en la Patagonia, donde normalmente los buques que pescan son del tipo llamado no fresqueros, o sea, buques factoría o congeladores.

Sr. Castillo (J. L.). — ¿Me permite una nueva interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Olima. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pascual). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: no es mi intención ingresar en un terreno conflictivo, pero le aclaro al señor diputado Olima que en la Patagonia pueden operar tranquila y normalmente barcos fresqueros, barcos costeros y buques pesqueros congeladores.

Sr. Presidente (Pascual). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: tiene razón el señor diputado José Luis Castillo; evitemos un debate que podría ser muy extenso.

De todas maneras mi inquietud es hallar un mecanismo por el que los cupos de pesca se otorguen a través de las bolsas de comercio, como sucede con los granos y tantos otros productos. Aquel que tenga interés en adquirir una cuota de capacidad de pesca, que haga el ofrecimiento en la bolsa de comercio como si fuera una licitación pública. ¿Por qué debemos mantener el anterior mecanismo?

Sé que estamos discutiendo una ley de pesca que significa un avance sustancial en la materia debido a la inexistencia de normas al respecto y a que el clima político no está maduro para un debate de esta naturaleza, pero esto no significa que con el mecanismo que se propicia

se resuelvan los inconvenientes. Avanzamos sustancialmente, pero seguimos dejando una cantidad de problemas pendientes.

Aunque sea para que quede registrado en el Diario de Sesiones, propongo la siguiente redacción para el artículo en consideración: "A partir de la vigencia de esta ley establécese el sistema de Administración por Cuotas Individuales de Capturas (CIC) en forma tal de garantizar la explotación racional y sustentable de los recursos pesqueros.

"Las CIC serán concesiones temporales por un plazo máximo de 15 años y no podrán superar por empresa o grupo empresario el 10 por ciento del porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas.

"En caso de suspensión definitiva de actividad de la empresa o grupo adjudicatario, el cupo correspondiente a éste será nuevamente licitado por los mismos métodos establecidos por la presente ley.

"El proceso de asignación de los CIC se llevará adelante mediante oferta pública en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de acuerdo con la legislación vigente.

"Facúltase al Consejo Federal Pesquero para que reglamente y dicte todas las normas necesarias para establecer el presente régimen de administración de los recursos pesqueros de acuerdo con las condiciones que surgen de la Captura Máxima Permisible.

"El Consejo Federal Pesquero podrá reservar hasta un 20 por ciento del total de la Captura Máxima Permisible como método de conservación y para asignarlos a sectores de interés social y conforme a la priorización que establezca el Consejo Federal Pesquero.

"Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles. Los contratos de transferencia deberán quedar registrados en sede de las bolsas de comercio regionales o de la provincia de Buenos Aires conforme a lo que determine la legislación vigente."

Señor presidente: no tengo la menor duda de que un mecanismo como el sugerido, más allá de que sea perfectible, daría mayor transparencia y simplicidad que el complejo régimen que hoy estamos estableciendo.

Sr. Presidente (Pascual). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Campero. — Señor presidente: me surgen algunas inquietudes respecto del último párrafo del artículo 30 —que pasaría a ser 29—, que

diría: "Los permisos o autorizaciones de pesca asignados a buques que se hundieran o ya estuvieran hundidos, y no hubieran cumplido con el reemplazo del buque siniestrado dentro de los plazos otorgados por la autoridad de aplicación, caducarán automáticamente".

¿Qué pasa en aquellos casos en que el siniestro, por ejemplo un incendio, no conlleva necesariamente el hundimiento del buque pero sí la desafección total o parcial de esa actividad, o en aquellos otros en los que, aun cuando se produzca un siniestro, el buque cambia de actividad o tiene un desguace parcial? En estos casos, ¿caduca o no automáticamente el permiso? Dicho de otra manera, ¿es necesario que el buque se hunda para la caducidad automática del permiso?

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinado Pierri.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Allende. — Señor presidente: deseo dirigirme a los miembros de la comisión, que tan inteligentemente y con tanta dedicación se han ocupado de este tema, para que terminemos de poner transparencia en un punto que está levantando ciertas dudas y preocupaciones, bastante naturales por cierto, como ya señalaran las señoras diputadas Vázquez y Carrió.

En este sentido, me permito sugerir que se tenga en cuenta la posibilidad de realizar una imposición —que para darle un nombre adecuado podríamos llamarla tasa o canon—, a aquellas transferencias que se realicen. De otra manera estaríamos frente a una situación bastante extraña, hasta desde el punto de vista jurídico.

Por un lado, aquel que adquiere un permiso de pesca tendría una especie de capacidad abstracta para ejercerlo, según le convenga, o transformarlo en un negocio de tipo exclusivamente financiero, vendiendo esa capacidad abstracta a otro eventual concesionario, si es que cabe esa denominación.

Para concluir, sugiero que se otorgue la facultad al Consejo para determinar, de acuerdo con el volumen de la posible captura o según las exigencias técnicas que se crean más convenientes, una imposición en cada caso de transferencia.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: bien se ha dicho hace unos momentos que éste iba a ser el artículo base para el debate del proyecto en consideración.

Quiero agregar que toda la normativa es importante teniendo en cuenta que hemos trabajado con la especial disposición de los distintos bloques para que ésta no fuera cualquier ley.

Hace mucho tiempo que el país reclama una ley federal de pesca. Por ello, establecimos conductas para este debate de modo de que lo que se obtuviera no fuera cualquier ley federal de pesca. Al mismo tiempo, en forma cotidiana hemos realizado esfuerzos para obtener la ley.

Es obvio que para lograr consenso en un tema tan importante se necesita una voluntad concreta, percepción de las aspiraciones de cada uno de los actores, en este caso de la industria pesquera, de aquellos que han invertido, que tienen capitales genuinamente nacionales, y de las organizaciones del trabajo; es menester tener en cuenta la necesidad de crear más puestos de trabajo, preservar los recursos, etcétera.

Esta es una ley que aborda temas absolutamente específicos que requieren un conocimiento teórico y práctico. Esto no va en detrimento de quienes no conocen la actividad, pero es importante que cada una de las embarcaciones sepa a dónde tiene que ir a pescar, a dónde puede y debe ir a pescar, qué arte de pesca debe utilizar para preservar el recurso y para lograr la mejor captura posible.

En definitiva, todo ello está contenido en este proyecto. Sin embargo, este artículo 29 fue objeto de distintos tipos de propuestas.

Los integrantes de la comisión saben que algunos sostenemos que el recurso es del Estado y por lo tanto nadie puede entender que un cupo para una captura determinada de una especie pueda ser el patrimonio de una empresa. Quiero que los integrantes de esta Cámara comprendan —esto no es en defensa de un sector de una industria en particular—, que quien va a ser beneficiario de un cupo para la captura de una especie determinada ha realizado una inversión previa en capital porque tiene un permiso de pesca que no es abstracto, ya que se refiere a un buque determinado que tiene un valor y que por ende constituye una inversión. Por lo tanto, no se van a dar cuotas de pesca a aquellos que no tengan un permiso de pesca.

No obstante lo antedicho, el debate llevado a cabo en la comisión y las propuestas que elevé

en su oportunidad, coincidiendo en algunos temas con las señoras diputadas de mi bloque que me precedieron en el uso de la palabra y con el señor diputado Acevedo, tenemos la posibilidad —y así lo he consultado con el señor presidente de la comisión, y lo hago ahora con el resto de los señores diputados—, de agregar la idea de que nadie puede incorporar lo que es patrimonio de todos, como si fuera de su propia empresa; me refiero a las cuotas de captura. Eso estaría ocurriendo si las transferencias se pudieran hacer libremente y en forma gratuita. Anticipo que éstos no son paquetes que se regalan todos los días. Quien obtiene una cuota para la captura lo logra porque tiene un bien, como es un buque para pescar y un permiso de pesca determinado.

Tiene que ser una circunstancia extraña a la propia explotación de la empresa la que determine que quien posea el cupo, quiera transferirlo. Los señores diputados habrán escuchado que en este artículo 29 se incorporó algo que resulta muy caro al debate de la comisión como es el reconocimiento al reclamo de una de las flotas que pescan en el Mar Argentino. Se trata de la protección a quienes menos depredan el recurso, en este caso a los barcos fresqueros.

Aunque pareciera un término más dentro del artículo la prohibición de que estos barcos fresqueros vendan su cuota de captura a los barcos congeladores es la imposición irrestricta de la ley para que se formen negocios monopólicos o, para decirlo con mayor simpleza, se trata de evitar que el grande se coma al chico. Lo que decimos es que esta redacción surge de un gran esfuerzo, donde se comprendió que se está poniendo una restricción a alguien que obtuvo una cuota determinada por decisión de un Consejo Federal constituido por representantes de las provincias y de la Nación.

Sé que muchas cosas más pudimos haber incorporado al artículo 29, ahora 27; también tengo que decir que hay muchas otras en ese artículo que no debieran estar. Acepto que reemplacemos la palabra “desde” por “hasta” cuando se hace referencia a diciembre de 1996, como propuso el señor diputado Stubrin.

Considero también razonable que se piense en quienes se van a incorporar a la actividad, pero advierto que el tema de la antigüedad corresponde a un inciso que el Consejo Federal deberá tener en cuenta para otorgar el cupo.

Por lo tanto, el Consejo Federal Pesquero tendrá que considerar una nueva situación. Se trata de una serie de cuestiones que nada tienen que ver con la antigüedad de la explotación. El

tema seguramente podrá beneficiar o no a la industria nacional en la capacidad de captura, en la elaboración del producto, en la mayor cantidad de mano de obra nacional que podrá incorporarse como valor agregado, etcétera.

Todos estos incisos concentrarán la aceptación del nuevo proyecto, y cuando hablo del nuevo proyecto incluyendo en esto al artículo 29 —ahora 27—, por el que se determina el valor del permiso de pesca.

En uno de los artículos habíamos incorporado la eliminación de los permisos de pesca otorgados en forma irrestricta y que seguramente seguirán funcionando durante un año, y habíamos dispuesto que el Consejo Federal de Pesca será quien determinará lo relativo a los nuevos proyectos.

Si bien no se pudo consensuar, aceptamos que ahora el permiso de pesca no es más que la habilitación comercial de funcionamiento. El valor está en la cuota de captura; esto es lo que realmente dará contenido al funcionamiento en cuanto a la extracción del producto.

Voy a proponer un agregado al segundo párrafo del inciso 5), que dice así: “Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles de conformidad con las condiciones que establecerá el Consejo Federal Pesquero, que fijará un derecho de transferencia a cargo del cesionario en relación al volumen de captura y al valor de la especie que la cuota autorice.” Creo que con este agregado estamos recogiendo la intención, la propuesta y el pensamiento de muchos señores diputados, no sólo del bloque radical.

Creo que así lo comprendió el señor presidente de la comisión. Creemos en la sensatez del Consejo Federal Pesquero, que así como sabrá valorar lo que el INIDEP le indique para establecer estas cuotas, cuando deba aplicar este derecho seguramente también valorará lo que expresa el texto que he propuesto.

Solicito a la Cámara que acepte mi proposición, que ha sido consultada con quienes tienen intereses particulares no sólo en la conservación del recurso sino asimismo en la cuantificación desde el punto de vista dinerario, o sea, aquellos que adquieren el derecho de la extracción de un recurso que es de todos.

De este modo dejo expresado el pensamiento de nuestro bloque —que estimo comprende el de muchos legisladores que han expuesto en ese sentido—, en el entendimiento de que nuestra propuesta confiere una mejor redacción al artículo. De esta forma otorgamos un valor a este recurso, que si bien es de todos, requiero

de una inversión previa para luego ser recogido, elaborado, vendido en el mercado interno y exportado de acuerdo con el tipo de explotación de cada una de las empresas que reciba ese cupo por parte del Consejo Federal Pesquero.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: las reflexiones y los aportes realizados por los señores diputados que se expresaron en relación con el artículo 29 han sido más que importantes y posibilitan que se pueda introducir alguna enmienda en este texto que ya de por sí constituye un avance tremendamente significativo en comparación con lo que sucedía hasta hoy con la actividad pesquera.

En la actualidad, en la República Argentina los permisos de pesca brindan derecho a una captura irrestricta, y el resultado está a la vista: un recurso en situación de crisis, la obligación por parte del gobierno nacional de disponer una zona de veda para una especie determinada y un riesgo potencial de sobreexplotación del mar en otras especies, que pueden correr la misma suerte que el recurso que hoy constituye nuestra principal exportación.

Es un dato de la realidad que las cuotas constituyen un activo de las empresas que puede ser transferido, e incluso algunos hasta pensamos que podría ser arrendado, aunque esta norma no lo contempla. En consecuencia, si se estableciera el pago de un canon —tal como lo ha propuesto el señor diputado Saggese—, se podría compatibilizar el avance sustantivo que implica la redacción del artículo 29 respecto del anterior sistema con las observaciones efectuadas por los legisladores que han opinado sobre este tema, presentando una visión del problema que, a mi juicio, no debe ser desatendida por la comisión.

Por lo expuesto, nuestro bloque apoya la proposición formulada por el señor diputado Saggese —de la que preferiríamos se dé lectura nuevamente—, en el sentido de establecer un valor a las transferencias de los cupos de captura.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: es evidente que la búsqueda de una legislación perfecta ha sido el objetivo de horas, días, meses y años de trabajo.

Cuando se hablaba de aceptar en forma integral lo dispuesto por el artículo 29 sobre el Consejo Federal Pesquero analizamos la posi-

bilidad de incorporar parte del esquema que trajeron a la discusión la señora diputada Vázquez y otros legisladores. Sin embargo, primó la confianza de que estos aspectos fueran normados lo más idóneamente posible por el Consejo Federal Pesquero, que tendrá como actores a cinco miembros del Poder Ejecutivo nacional y a cinco miembros de las cinco provincias del litoral atlántico. Confiamos en eso, y nuestra intención fue dar un marco de racionalidad a lo que el Consejo Federal Pesquero pudiera plantear. Por ello, antes de avanzar en la redacción de la iniciativa en cuestión tuvimos que consensuar el artículo 29 —ahora 27—, en las reuniones de trabajo. Finalmente no se aprobó la facultad absoluta del Consejo Federal Pesquero de manejar toda la temática relacionada con los aspectos que ahora sí se plantean en el texto del artículo 29 —ahora 27—, que hemos consensuado.

Por otra parte, se ha propuesto la incorporación de nuevos párrafos, lo que ha sido posible gracias a la colaboración de la Unión Cívica Radical, al guño del señor presidente de la comisión —que pertenecen a nuestro bloque—, y al representante del Frepaso. La redacción propuesta por el señor diputado Saggese contemplaba un esquema que venía de antes y que habíamos planteado como una facultad del Consejo, pero que finalmente ha quedado en el aire.

Espero que el señor diputado Castillo, en representación de la comisión, acompañe esta postura que considero positiva.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Vázquez. — Señor presidente: dado que habíamos iniciado un debate acerca de la onerosidad de las cuotas individuales y teniendo en cuenta el planteo del señor diputado Saggese, que ha sido discutido con el señor diputado Castillo, debo señalar que si bien esto no refleja la totalidad de lo que nosotros estábamos solicitando —partiendo del principio de que las leyes, más que perfectas, son perfectibles—, estaríamos dispuestos a aceptar la propuesta. Si ello es así, retiraría el pedido de autorización del cuerpo a efectos de abstenerme en la votación del artículo 29 —ahora 27—, siempre y cuando la redacción final incluya la onerosidad en la transferencia de las cuotas individuales de captura.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: he escuchado atentamente la posición de los legisla-

dores abogados, que son quienes han hecho un planteo jurídicamente correcto. Sin embargo, como se ha dicho más de una vez, cuando se elabora una ley hay que dejar sentado, con la voz del pueblo, cuál es el espíritu del legislador. Por ello, quiero ser muy franco respecto de este tema.

Si el concepto es que la cuotificación responde a que nosotros la estipulamos para repartir riqueza, tendría un significado comercial: aquel que recibe cuotas tiene un capital asegurado. Pero el espíritu del legislador es el opuesto.

Cuando la comisión empezó a analizar este artículo pensábamos estipular cuotas, pero para preservar y conservar los recursos. De manera que el sentido es el inverso: vamos a fijar cuotas no para dar más sino para dar menos porque vamos a tener menos. Frente a la existencia de un permiso irrestricto que aunque no está escrito en ningún lado otorga un derecho adquirido para pescar todos los años la cantidad que se quiera, ¿cómo hacemos para controlar este recurso que es de todos y que se agota?

Se nos ocurrió hablar de cupos, pero durante la discusión apareció la palabra cuotas. Si se lee bien el artículo 29, se observará que la comisión se ha cuidado de que a la palabra cuota se le coloque nombre y apellido, ya que hay muchos que hablan de cuota individual transferible.

Nosotros nos referimos a cuota de captura, porque no nos pusimos a discutir qué tipo de modelo va a regir en la Argentina en cuanto a la nueva política pesquera. Pensábamos que si los 257 diputados debatíamos sobre qué tipo de modelo íbamos a aplicar para pescar en el futuro, cada legislador iba a traer en su bolsillo el reclamo sectorial de los intereses de la provincia que representa. En realidad, este artículo dice que otorgamos toda la facultad al Consejo Federal Pesquero.

Ese órgano tiene la facultad para dictar todas las normas necesarias que permitan establecer un nuevo modelo en la República Argentina, y estará constituido por la Nación y las provincias, quienes son los dueños del recurso.

Si alguien tiene dudas, se puede volver a leer la facultad que tiene el Consejo Federal Pesquero: "Facúltase al Consejo Federal Pesquero para que reglamente y dicte todas las normas necesarias para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros mediante el otorgamiento de cuotas de captura por especies, por buque, zona de pesca y tipo de flota."

No le decimos cómo tiene que proceder, sino que otorgamos parámetros al Consejo para que

dictamine. No le predeterminamos un tipo de flota, una zona de pesca o una clase de buques, sino que le señalamos que debe tomar en cuenta todos y cada uno de los parámetros mencionados.

En segundo lugar, la cuota de captura no constituye concesiones definitivas, sino temporales, porque ella significará que se va a otorgar mientras exista la especie. Si se agota, no habrá más cuotas. Aquí han desaparecido especies y otras están muy cerca de seguir ese camino. Puede pensarse en lo que ocurrió con los langostinos: hace muy pocos años —cinco o seis—, esa especie era una riqueza de la República Argentina. Fíjense ahora cuánto cuesta pescar una tonelada de langostinos.

Entonces, nuestro objetivo es la conservación. Aquí no hay posibilidades de que quien tenga una cuota, pesque de más. Es al revés: quien tenga una cuota, tendrá que respetarla.

¿Qué ocurrirá con todas las empresas que ya están instaladas y tienen capitales invertidos? ¿Qué diremos a una empresa que tiene quinientos trabajadores en tierra y tres barcos? ¿Acaso le podríamos decir que deberá disminuir las 15 mil toneladas que pescaba a 5 mil?

Algunos me dijeron que eso era correcto y que la empresa, en todo caso, podría ir a la quiebra. Se podría señalar que ello es fácil, porque después de todo, los quinientos trabajadores quedarían en la calle y luego se diría que ello responde al modelo económico que establece el gobierno nacional para hacer el ajuste. Así la oposición ganaría votos, aunque diga que defiende el modelo.

¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos preservar a las empresas que ya están en actividad, a fin de que sigan dando la misma cantidad de trabajo. Nuestra prioridad absoluta es la ocupación de la mano de obra nacional. Esta no es una declamación. No se trata de que queremos quedar bien con la gente, sino que sentimos que debemos hacerlo. Si no preservamos al ser humano, se producirá un achicamiento y lo único que habremos cuidado será el capital. En cambio, nosotros queremos preservar al ser humano. (Aplausos.)

El artículo 29 —ahora 27— fue muy discutido. Con respecto a lo que pasará con las cuotas, dice: "Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles de conformidad con las condiciones que establezca el Consejo Federal Pesquero." Nosotros no decimos que hay que regalar las cuotas. Tampoco impedimos al Consejo Federal Pesquero que fije un monto de transferencia de las cuotas, pero no queremos

empezar a discutir cómo transferir las cuotas, porque ahí sí entraríamos en un nuevo modelo.

Todo esto tiene que quedar en claro, porque si no parecería que el trabajo que realizamos durante cuatro años quemándonos las pestañas para estudiar este proyecto de ley implica una transferencia de cuotas que puede producir un derecho adquirido y un patrimonio activo. Yo no sé un camino de eso, pero sé lo que significa, y nunca pensé en ello cuando estudié esta iniciativa. Lo que sí pensaba era cómo hacíamos nosotros para evitar que se pesquen 650 mil toneladas cuando tenemos una capacidad máxima de captura de 390 mil. ¡No hay otra forma! ¡Hay que achicarse! Esto lo tenemos que decir acá, porque quien sueña que se van a dar nuevos permisos de pesca y mayor otorgamiento de cuota se va a encontrar con que eso va a ser imposible.

Por veinte años no va a existir un solo permiso de pesca más, porque la Argentina está potencialmente capacitada para pescar un millón cien mil toneladas y no podemos pescar más de 390 mil toneladas. Esa es la realidad de lo que estamos discutiendo.

Con respecto a lo que ha dicho el señor diputado Stubrin debo reconocer que tiene razón, porque quizás en el apuro no empleamos bien la sintaxis —creo que así se dice—. (*Risas.*) La comisión va a aceptar su propuesta por lo que el inciso 3) del artículo 29, que pasa a ser 27, va a quedar redactado de la siguiente forma: "El promedio de toneladas de captura legal de cada especie efectuado durante los últimos ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1996, por buque o por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario." El inciso 4) quedaría redactado de la siguiente forma: "El promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra de cada especie en los últimos ocho (8) años, medidos hasta el 31 de diciembre de 1996, por buque o por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario."

En cuanto a lo que preguntaba el señor diputado Stubrin en relación con el artículo 40 en el sentido de por qué la ley no iba ocho años atrás para quitar los permisos otorgados, debo decir que las leyes no se aplican con carácter retroactivo. Esto me lo enseñaron aquí. En cambio, cuando hablo de ocho años atrás lo hago para realizar un promedio y no para quitar un derecho adquirido. No puedo decirle a la gente que voy a retirar un permiso que fue adquirido hace ocho años.

Con respecto a la palabra canon debo decir que cuando hablamos de que se pueden fijar derechos de extracción o cánones lo hacemos porque el artículo 44 determina a quién le corresponde el derecho de extracción —los buques pesqueros nacionales— y a quiénes les corresponde pagar cánones —los buques de bandera extranjera— y que sólo pueden pescar con autorización expresa del Congreso de la Nación. O sea que ya está establecido lo que es derecho de extracción o canon.

También voy a aceptar la propuesta del señor diputado Campero, por lo que propongo para el último párrafo del artículo 30 —ahora 28—, la siguiente redacción: "Los permisos o autorizaciones de pesca asignados a buques que se hundieran o ya estuvieran hundidos, o que hubieran sido afectados por otro tipo de siniestro que significó el impedimento para desarrollar su operatividad y no hubieran cumplido con el reemplazo del buque siniestrado dentro de los plazos otorgados por la autoridad de aplicación, caducarán automáticamente." De esta manera involucramos no solamente a aquel buque que ha sido afectado por el hundimiento sino también a los que pudieron haber sufrido un incendio o cualquier otro tipo de siniestro.

Sr. Campero. — ¿Me permite una interrupción, señor presidente, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Castillo (J. L.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Campero. — Señor presidente: pienso que también deberíamos incorporar aquellos casos en que no existió siniestro, pero la actividad se vio afectada.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Flores. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Castillo (J. L.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: seré sumamente breve. Todos queremos poner el acento en la mejora de la calidad de vida de todos los argentinos y en particular, con referencia al tema de la pesca, a quienes se dedican a esta actividad. Es conocida la situación de penuria que

atraviesa no sólo el personal embarcado sino también el de la estiba. En todo caso, hay responsabilidades concretas que son el resultado de políticas efectivas que se han llevado adelante en los últimos años, como el señor diputado Castillo se encargó de señalar.

Yendo al punto en discusión, coincido con lo que ha planteado el señor diputado Castillo, pero me parece que omite un pequeño detalle: que la transferencia a título oneroso de un activo de la empresa, como es en este caso la cuota asignada, puede gravarse perfectamente por parte del Estado, y me parece que así cumplimos con el aporte. Se ha estado hablando nada más que de eso: de que sea gravada la transferencia a título oneroso de esos títulos.

En ese sentido la comisión podría aceptar que se faculte al Consejo Federal Pesquero a fijar el gravamen que debe establecerse sobre las transferencias a título oneroso de las cuotas de captura.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: el señor diputado Flores tiene una gran capacidad para pedir interrupciones y contestar lo que he manifestado respecto de algunas chicanas electorales que se pueden hacer. Lo felicito, pero yo no dije que no aceptaba la propuesta del señor diputado Saggese. Lo que pudo haber molestado al señor diputado Flores es que yo haya dicho que nosotros apuntamos a salvar a la gente, porque él afirma que alguna medida que tomó el gobierno provocó la desocupación de mucha gente. A esto le respondo que no debe olvidar que su partido llevó como una bandera la defensa del actual modelo económico. Entonces... (*Aplausos*).

—Varios señores diputados hablan a la vez.
—Manifestaciones en las galerías.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: esto lo digo con todo respeto, dentro de la amistad que me une al señor diputado Flores. Simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de aclarar el tema.

Solicito que se me acerque el texto de la propuesta del señor diputado Saggese a fin de que pueda leerla y elaborar la redacción que corresponde a la modificación del artículo 29, que ha pasado a ser 27.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado Saggese: la Presidencia le solicita que acerque al

señor diputado José Castillo el texto de la modificación.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: daré lectura de la modificación aceptada por la comisión respecto del artículo 29 —ahora 27—, al margen de lo expresado en relación con la propuesta formulada por el señor diputado Sturbrin. Dice así: "Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles de conformidad con las condiciones que establezca el Consejo Federal Pesquero,...", —a continuación agregamos las palabras propuestas por el señor diputado Saggese—, "...que establecerá un derecho de transferencia a cargo del cesionario, en relación al volumen de captura y valor de la especie que la cuota autoriza", y luego sigue la redacción que yo propusiera anteriormente.

No aceptando ningún otro tipo de modificación, solicito que se pase a la votación del capítulo en tratamiento.

Sr. Olima. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: desearía que se me explicara pues francamente no lo entiendo—, por qué respecto del inciso 2) del artículo 28 se ha propuesto extender de veinte a treinta años el plazo de otorgamiento de los permisos de pesca.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: si el señor diputado Olima ha leído el artículo habrá advertido que existen diferencias. Para el caso de que no haya inversión en tierra, los permisos se otorgarán por un plazo de hasta diez años. Pero a efectos de dar mayores respuestas a aquellos empresarios que verdaderamente quieren radicarse e instalar fábricas en tierra, y presenten un proyecto en tal sentido, hoy la comisión interpretó que era necesario ampliar el plazo a fin de que pudieran amortizar la inversión. Ese ha sido el fundamento de la propuesta de modificación.

Sr. Patterson. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Patterson. — Señor presidente: entiendo que debería aceptarse que, en relación con las modificaciones del artículo 25, debería hacerse referencia a los artículos 7º y 9º y no a los artículos 8º y 10.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: a raíz de que ha sido suprimido un capítulo completo y se han agregado nuevos artículos, solicito que se faculte a la Presidencia para que, en un trabajo muy minucioso, reordene la numeración de los artículos de acuerdo con aquellas modificaciones. Ello, para evitar hacer referencia a artículos que no existirían más; además, dentro de esas modificaciones se puede incluir la propuesta del señor diputado Patterson.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo IX del dictamen —ahora VIII—, que comprende los artículos 25 a 35 —que pasan a ser 23 a 34—, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo X del dictamen —ahora IX—, que comprende los artículos 36 a 39, ahora 35 a 38.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: proponemos reemplazar en el artículo 36 —ahora 35—, las palabras “control nacional” por “jurisdicción argentina”.

Asimismo, en el primer párrafo y en el inciso a) del artículo 38 —que pasa a ser 37—, propiciamos el reemplazo de la expresión “control nacional” por “jurisdicción argentina”.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corehuelo Blasco. — Señor presidente: durante el debate en comisión de estos artículos también habíamos coincidido en eliminar la expresión “autoridad de aplicación” del artículo 37, ahora 36.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Saggese. — Señor presidente: en relación con el artículo 37 —ahora 36—, quiero hacer presente que, como firmante en disidencia en su oportunidad había propuesto a la comisión la supresión de esta norma en el entendimiento de que la política de charteo

debía determinarse de otra manera en función de lo que sabemos ha ocurrido con algunas especies como el calamar, aspecto que hemos resaltado durante el debate en general.

Sin embargo, no puedo negar que durante el debate de esta iniciativa en el seno de la comisión, y luego de haber escuchado atentamente las razones que motivaban el contenido del artículo 37, aun quienes pensamos que había que eliminarlo hemos comprendido que es el Consejo Federal Pesquero el organismo que en definitiva fijará las políticas en la materia.

Esto es necesario decirlo para que cuando oportunamente se constituya el Consejo Federal Pesquero y deba recurrir a los diarios de sesiones para conocer el pensamiento de los legisladores sobre este tema, acceda a las opiniones de los señores diputados durante el debate en general y, en particular.

Es necesario que en relación con ciertas especies —en este caso el calamar— el Consejo Federal Pesquero estudie con seriedad la posibilidad de que al producto se le añada valor agregado.

He manifestado —nadie me ha desmentido—, que existe la posibilidad de que a las 300 mil toneladas de calamar de este año —que es menos de lo que se ha pescado el año pasado—, se le pueda asignar valor agregado. De modo que cada tonelada de pescado entero, que vale mil dólares, con el valor agregado puesto en tierra y el trabajo de la mano de obra nacional, llegaría a los seis mil dólares, circunstancia que implicaría un importante ingreso de divisas para el país y más de cuatro mil puestos de trabajo para mano de obra argentina, además de una reducción en el pago de fletes.

Formulo estas expresiones para que cuando el Consejo Federal Pesquero fije las políticas a favor del plan de charteo a fin de que el pescado no se vaya, no se lo coma la merluza, no lo pesquen los ingleses, etcétera, sepa que existen otras políticas aplicables en defensa de lo que pretende no solamente un partido político —le pido al presidente de la comisión que acepte estas palabras, que no son propaganda política a favor de la Unión Cívica Radical y de la Alianza—, porque todos pensamos en la superación de la familia argentina y queremos que haya más trabajo. Estamos haciendo un esfuerzo al consensuar la redacción de este proyecto de ley porque, antes que el capital, que la explotación, que los excesos, estamos colocando al hombre como primordial eje de nuestra actividad, para que tenga una mejor forma de vida junto a su familia.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: la comisión acepta la propuesta del señor diputado Corechuco Blasco de eliminar en el artículo 37 —ahora 36—, las palabras “de la autoridad de aplicación y...”

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo X —ahora IX—, que comprende los artículos 36 a 39 —ahora 35 a 38—, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo XI —ahora X—, que comprende los artículos 40 y 41, ahora 39 y 40.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: la comisión propone que el artículo 40 —ahora 39—, quede redactado de la siguiente forma: “A los fines de esta ley, será obligatorio, para todo el personal embarcado a bordo de los buques pesqueros, poseer libreta de embarco, título, patente, cédula de embarque o certificado de habilitación profesional expedidos por las autoridades competentes en las condiciones que estipulan las normas nacionales.”

Asimismo, se propone la siguiente redacción para el artículo 41, que pasa a ser 40: “La tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida de acuerdo a las estipulaciones siguientes: a) Las habilitaciones de capitales y oficiales se reservan para los argentinos nativos, por opción o naturalizados; b) El 75 por ciento del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo de los buques pesqueros debe estar constituidos por argentinos o extranjeros con más de diez (10) años de residencia permanente efectivamente acreditada en el país; c) En caso de requerirse el embarco de personal extranjero, ante la falta de personal enunciado en el inciso anterior, el embarque del mismo será efectuado en forma provisoria cumpliendo con las normas legales vigentes. Habiendo tripulaciones argentinas en disponibilidad, la tripulación debe ser completada con ellos”.

Al final se agregaría lo siguiente: “Las reservas establecidas en los incisos a) y b) en ningún caso podrán dificultar la operatoria normal de los buques pesqueros, quedando facultado

el Consejo Federal Pesquero para dictar las normas necesarias para cumplir esta disposición.”

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo XI —ahora X—, que comprende los artículos 40 y 41 —ahora 39 y 40—, con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo XII —ahora XI—, que comprende los artículos 42 y 43, ahora 41 y 42.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo XIII —ahora XII—, que comprende los artículos 44 a 46, que pasan a ser 43 a 45.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo XIV —ahora XIII—, que comprende los artículos 47 a 66, ahora 46 a 65.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: en los artículos 48 y 50 —ahora 47 a 49—, proponemos reemplazar las palabras “control nacional” por “jurisdicción argentina”.

En el artículo 52 —ahora 51—, proponemos reemplazar el inciso a) por el siguiente: “Multa de diez mil pesos (\$ 10.000) hasta un millón de pesos (\$ 1.000.000)”.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo XIV —ahora XIII—, que comprende los artículos 47 a 66 —ahora 46 a 65—, con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo XV —ahora XIV—, que comprende los artículos 67 a 73, ahora 66 a 72.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: proponemos reemplazar el texto del artículo 71

—ahora 70—, por el siguiente: “La autoridad de aplicación convocará a las provincias con litoral marítimo a integrarse al Consejo Federal Pesquero en un plazo de sesenta (60) días a partir de la promulgación de esta ley”.

Asimismo, proponemos reemplazar el artículo 72 —ahora 71—, por la siguiente redacción: “La autoridad de aplicación procederá dentro de los noventa (90) días de promulgada esta ley, a la reinscripción de todos los buques con permiso de pesca vigente. Los permisos correspondientes a los buques que no hubieran operado durante los últimos ciento ochenta (180) días en forma injustificada para la autoridad de aplicación, caducarán automáticamente, cualquiera fuera su situación jurídica.

“Los permisos preexistentes de los buques que cumplan con los requisitos para su reinscripción, serán inscriptos en forma definitiva, y quedarán sujetos al régimen de pesca previsto en la presente ley.”

Por otra parte, proponemos reemplazar el artículo 73 —ahora 72—, por el siguiente texto: “Deróganse el artículo 4º de la ley 17.094, el inciso 1) del artículo 6º y el artículo 8º de la ley 21.673, el artículo 2º de la ley 22.260, y las leyes 17.500, 18.502, 19.001, 20.136, 20.489, 21.514, 22.018, 22.107 y toda otra norma legal, en todo aquello que se oponga a lo establecido en la presente ley”.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Patterson. — Señor presidente: deseamos proponer que en la modificación del artículo 72 —ahora 71—, donde dice “...en forma injustificada para la autoridad de aplicación...”, se agregue “y el Consejo Federal Pesquero.”

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La Comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado por Santa Cruz?

Sr. Castillo (J. L.). — La Comisión acepta la propuesta. Por lo tanto, en el artículo 72 —ahora 71—, del dictamen, después de la expresión “para la autoridad de aplicación”, se agregará “y el Consejo Federal Pesquero”.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo XV —ahora XIV—, que comprende los artículos 67 a 73 —ahora 66 a 72—, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

—El artículo 74 —ahora 73— es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹ (*Aplausos*)

Habiendo sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.

La Presidencia aclara que, de acuerdo con lo que establece el artículo 81 de la Constitución Nacional, en cada una de las votaciones la mayoría obtenida superó los dos tercios de los votos emitidos. (*Aplausos prolongados*.)

6

MOCIONES DE ORDEN

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Camaño. — Señor presidente: de acuerdo con el plan elaborado durante la tarde de hoy por la Comisión de Labor Parlamentaria, debo pedir, en su nombre, el apartamiento del reglamento para la incorporación de varios asuntos al plan de labor y su posterior tratamiento sobre tablas. Se trata de los proyectos que paso a mencionar.

Orden del Día Nº 1.933, que contiene el dictamen recaído en el proyecto de ley sobre régimen de reestructuración de las fuerzas armadas; proyecto de ley en revisión, contenido en el expediente 100-S.-97, por el que se fijan los límites de la Reserva Nacional Nahuel Huapi; dictamen en el proyecto de ley en revisión, contenido en el Orden del Día Nº 2.231, sobre Ministerio Público; dictamen en el proyecto de declaración por el que se declara de interés parlamentario un congreso a realizarse en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires (Orden del Día Nº 2.182); proyecto de ley en revisión, contenido en el expediente 164-S.-97, por el que se transfiere a la provincia de Córdoba, a título gratuito, la unidad de generación Complejo Hidroeléctrico Río Grande; dictamen en el proyecto de ley —contenido en el Orden del Día Nº 2.178— sobre ampliación del presupuesto de la Administración Nacional para 1997, con destino a la Administración Nacional del Seguro de Salud, en la jurisdicción 80, del Ministerio de Salud y Acción Social; asunto venido en revisión, contenido en el expediente 136-S.-95, sobre insistencia ante un veto del Poder Ejecutivo para la transferencia de un inmueble de la Asociación Civil Club Teléfonos de Buenos Aires; y dictamen en el proyecto de ley sobre ampliación del presupuesto para la

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 4408.)